

Birgit Aschmann | Christian Waldhoff (Hrsg.)

## DIE SPANISCHE VERFASSUNG VON 1978

*Entstehung – Praxis – Krise?*

 **Aschendorff**  
Verlag

# SPANISCHE FORSCHUNGEN DER GÖRRESGESELLSCHAFT

Begründet von Heinrich Finke, Wilhelm Neuss, Georg Schreiber,  
fortgeführt von Johannes Vincke und Odilo Engels

HERAUSGEGEBEN VON BIRGIT ASCHMANN, KLAUS HERBERS  
UND CHRISTOPH STROSETZKI

44. BAND

Umschlagfoto:  
König Juan Carlos unterzeichnet die Spanische Verfassung am 27.12.1978.  
Copyright: Central Press, Getty Images



© 2020 Aschendorff Verlag GmbH & Co. KG, Münster

[www.aschendorff-buchverlag.de](http://www.aschendorff-buchverlag.de)

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Vergütungsansprüche des § 54, Abs. 2, UrhG, werden durch die Verwertungsgesellschaft Wort wahrgenommen.

Printed in Germany  
Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier ☺

ISBN 978-3-402-14872-3  
ISBN 978-3-402-14873-0 (E-Book PDF)

## Inhaltsverzeichnis

Einleitung .....	7
DIE VERFASSUNG IM HISTORISCH-POLITISCHEN KONTEXT	
<i>Birgit Aschmann</i> Die Verfassung von 1978 im Kontext der spanischen Geschichte .....	15
<i>Alejandro Saiz Arnaiz</i> La Ley para la Reforma Política: de la legalidad fundamental del franquismo a la Constitución democrática .....	31
<i>Andreu Mayayo i Artal</i> La ruptura con el franquismo .....	43
DIE VERFASSUNGSENTSTEHUNG IM EUROPÄISCHEN VERGLEICH	
<i>Christian Waldhoff</i> Der „constitutional moment“. Wann und wie entstehen Verfassungen? .....	57
<i>Karl-Peter Sommermann</i> Die südeuropäischen Transformationsverfassungen der 1970er Jahre im Vergleich – Griechenland, Portugal, Spanien .....	71
DIE ROLLE DER GRUNDRECHTE IN DER SPANISCHEN VERFASSUNG	
<i>Luis López Guerra</i> Los derechos fundamentales en la Constitución española .....	91
<i>Itziar Gómez Fernández</i> Vulnerabilidad y derechos fundamentales en el actual sistema constitucional español .....	101
DER ZUSAMMENHANG VON RECHT UND GESELLSCHAFT: VERFASSUNGSPATRIOTISMUS IN SPANIEN?	
<i>Xosé M. Núñez Seixas</i> Verfassungspatriotismus und Nationalismus im Spanien des 21. Jahrhunderts .....	125

<i>José Manuel Sánchez Saudoín</i> La relación entre el derecho, la historia y la sociedad. . . . .	141
ZUR KRISE UND ZUKUNFT DER SPANISCHEN VERFASSUNG	
<i>Pedro Cruz Villalón</i> El malogrado Estado de las nacionalidades (y la enorme dificultad de su reconducción) . . . . .	153
<i>Walther L. Bernecker</i> ¿Existe una urgente necesidad de reformar la Constitución española de 1978? . . . . .	167
<i>Jordi Canal</i> La Constitución española, la monarquía de Felipe VI y el proceso independentista en Cataluña (2014-2018) . . . . .	177
ANHANG	
Spanische Verfassung vom 6. Dezember 1978 . . . . .	203
Autorinnen und Autoren . . . . .	251

## La ruptura con el franquismo

*Andreu Mayayo i Artal*

La Constitución Española cumple 40 años con una salud precaria. La Transición ha perdido la batalla del relato emparedada entre la apropiación obscena de la derecha y la estupidez de la nueva izquierda, que ha comprado la falsa visión de la derecha para construir su discurso contra el llamado *Régimen del 78* e imputarle la culpa de todas las insuficiencias e insatisfacciones del presente. No cabe un tonto más o, como diría Goethe, aprendices de brujo, que pueden enviar al vertedero de la Historia uno de los momentos estelares de nuestro pasado reciente. Con demasiada frecuencia e inconsciencia muchos de nuestros jóvenes vindican como héroes a sus abuelos que perdieron la guerra y la revolución mientras reniegan de sus padres que ganaron la democracia. La Historia parte de los hechos, explica el contexto, presenta y discute la pluralidad de interpretaciones y matizaciones y se renueva constantemente a partir de nuevas preguntas y de nuevas aportaciones documentales de todo tipo. En definitiva, la mirada histórica trata de comprender no de convencer, quizás sea menos épica pero más útil. Me permitirán que, con esta voluntad y con este espíritu, exponga unos comentarios con brevedad y, seguramente, demasiada concisión.

El concepto de Transición<sup>1</sup> nos remite al tránsito de la Dictadura franquista a un Estado social y democrático de derecho, tal como sanciona el artículo primero de la Constitución, constituyendo la prueba más evidente de la ruptura jurídico-política con el Régimen anterior. Imputar a la Transición la obligatoriedad de imponer el advenimiento de la Tercera República es desconocer las estrategias de largo recorrido planteadas por la oposición antifranquista, del PCE en el año 1956, con la aprobación de la Política de Reconciliación Nacional, y de los acuerdos entre democristianos y socialistas (PSOE) desde 1962 en el IV Congreso del Movimiento Europeo celebrado en Múnich. Para los que pusieron en peligro su vida, su integridad física, su sustento y el bienestar de sus familias— no de aquellos que se despertaron, en algunos casos después de 40 años de hibernación, tras la muerte de Franco—el dilema esencial era entre dictadura y democracia, no entre monarquía y república. Para el antifranquismo militante la Segunda República era vindicada y la Tercera República era deseada pero lo único innegociable era la recuperación de las libertades democráticas.

La cronología de la Transición política abarca desde la muerte de Franco hasta la victoria socialista en las elecciones generales de octubre de 1982, cuando pasa a gobernar una fuerza política que forma parte de los vencidos en la guerra civil, del exilio republicano y de la oposición antifranquista, desplazando a una clase política procedente del franquismo. En Catalunya y Euskadi, con las elecciones a los respectivos parlamentos autonómicos y la

1 La bibliografía historiográfica sobre la Transición es hoy en día abundante. Al texto clásico de Álvaro Soto, *Transición y Cambio en España (1975–1996)*. Madrid 2005, cabe destacar el reciente de Carme Molinero y Pere Ysàs, *La Transición Historia y relatos*. Madrid 2018. Desde un punto de vista más crítico Ferran Gallego, *El mito de la Transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia en España (1973–1977)* Barcelona 2008. La visión más completa de sus protagonistas se encuentra en Rafael Aracil, Andreu Mayayo y Antoni Segura (eds.), *Memòria de la Transició a Espanya i a Catalunya*. 6 vols. Barcelona 2000–2005.

Constitución de los gobiernos nacionalistas, puede adelantarse el período democrático al año 1980. Con demasiada ligereza se achaca a la Transición lo que resulta en el debe de la Democracia. El propio Felipe González, en un alarde inusual de autocrítica, reconoció el error de la nula reparación moral de las víctimas de la dictadura y la ausencia de políticas públicas de memoria democrática. Cabe recordar que más de cinco mil españoles perdieron la vida en los campos de concentración nazis, principalmente en el complejo de Mauthausen-Gusen, tras lavarse las manos como Pilatos el gobierno español, que los consideró no tan sólo enemigos del Estado sino también apátridas. Cabría esperar hasta el año 2005 para que asistiese por primera vez un presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a los actos conmemorativos de la liberación de los campos y, concretamente, el central de Auschwitz y el particular de Mauthausen. Tampoco Jordi Pujol, que gobernó veintitrés largos años (1980-2003), tuvo tiempo de depositar un ramo de flores en el campo de Mauthausen donde fueron asesinados cerca de dos mil compatriotas, entre ellos, Josep Miret, exconsejero (ministro) del gobierno catalán y dirigente del *Partit Socialista Unificat de Catalunya* (comunista).

Producciones televisivas de gran audiencia, como la serie documental *La Transición* (1995), dirigida por Victoria Prego o los dos capítulos de la mini serie *23-F, el día más difícil del Rey* (2009), dirigida por Silvia Quer (que continua siendo, con 7 millones de espectadores, la serie más vista en España), han proyectado los paradigmas explicativos de una Transición pilotada por el Rey, fruto del desarrollismo franquista, pacífica y consensual. Nada más lejos de la realidad. Lo que preocupaba principalmente a Juan Carlos I era la continuidad de la Corona y, cuando fracasó la reforma franquista del gobierno Arias-Fraga, no fue obstáculo para el cambio democrático, al que supo ligar con habilidad la suerte de la monarquía. Siguiendo la metáfora del Rey como motor del cambio, repetida hasta la saciedad, podemos matizar que más bien el Rey levantó el pie del pedal del freno y puso el coche en punto muerto. Utilizando un lenguaje más castizo: «No voy, que me llevan». Con una capacidad de adaptación envidiable, un fino jurista, Torcuato Fernández-Miranda, y un ambicioso animal político, Adolfo Suárez, el Rey consiguió pasar de una monarquía de legitimidad franquista (llamada del 18 de Julio o de los Azules) a una monarquía parlamentaria sancionada por una Constitución democrática, incorporando la legitimidad histórica de la casa de Borbón, tras la renuncia a su favor de su padre, depositario de los derechos dinásticos, el 14 de mayo de 1977. Parafraseando la famosa sentencia *lampedusiana* («se vogliamo che tutto rimangi come è, bisogna che tutto cambi»), para la legitimación de la monarquía era indispensable el cambio democrático.

El modelo de tránsito a la democracia, a diferencia de Grecia o Portugal, fue mucho más continuista en la política pero al mismo tiempo fue, también a diferencia de Grecia y Portugal, mucho más rupturista en la sociedad, con un proceso extraordinario y sorprendente de laicización y de pérdida de influencia de la Iglesia Católica.<sup>2</sup> Los seminarios se vaciaron a la misma velocidad que se llenaban las discotecas. Solamente la sombra alargada de la guadaña de la droga oscurecía la radiante *movida* de libertad cultural y de costumbres. El concepto de revolución pasiva, acuñado por Antonio Gramsci en su análisis del *Risorgimento* italiano,

2 Merece la pena destacar las contribuciones académicas en el ámbito de la Transición a la democracia en España, sobre todo, innovadoras desde la perspectiva social del profesor Rafael Quirosa-Cheyrouze (ed.), *La sociedad española en la Transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador*. Madrid 2011.

nos sirve para etiquetar una Transición donde se produce una ruptura con el franquismo espoleada por la movilización social pero dirigida por la clase política franquista. El dirigente comunista italiano también la definirá como la revolución sin revolución, es decir, donde se materializan las propuestas de cambio asumidas por la vieja clase dominante.<sup>3</sup>

Los juristas hablan de la ley y del espíritu de la ley mientras los historiadores nos referimos a los hechos y el contexto. En este sentido, cabe situar la Transición en el contexto internacional de Guerra Fría y de recesión económica y en el contexto nacional marcado por una presencia viva de la Guerra Civil, la tutela del Ejército, la violencia política y la conflictividad laboral y ciudadana.

La Guerra Fría no era un recuerdo de los años cincuenta sino una presencia paralizante a finales de los años setenta y principios de los ochenta. Se recalentó, entre 1979 y 1982, con la instalación de misiles nucleares norteamericanos en cinco países de la OTAN. El éxito de la película *The day after* (1983), dirigida por Nicolas Meyer, reflejaba con nitidez la creencia fatal de la inmediatez de una confrontación nuclear. Con lo cual, las bases militares estadounidenses en España cobraban una importancia vital. No ha de extrañar que el presidente Gerald Ford recibiera con todos los honores— cena de gala en la Casa Blanca, incluida —a los Reyes de España. Una fotografía, por cierto, imposible de obtener en los palacios presidenciales europeos. Todavía estaba demasiado reciente en la retina la imagen del primer ministro sueco Olof Palme con un cartel tipo sándwich y blandiendo una hucha por las calles de Estocolmo pidiendo el óbolo para los presos políticos españoles. Para los gobernantes europeos, muchos de ellos socialdemócratas<sup>4</sup>, el Rey era el heredero de Franco. Mientras el interés de los americanos<sup>5</sup> era la estabilidad del Régimen, que no pusiera en peligro la plena utilización de las bases militares, los europeos exigían democracia para su incorporación en la anhelada Comunidad Económica Europea (CEE).

Se le atribuye al ministro catalán Laureano López Rodó la afirmación según la cual la democracia sería una realidad en España cuando se alcanzaran los dos mil dólares de renta per cápita. Sólo hace falta ver las primeras temporadas de *Cuéntame cómo pasó*, la longeva y exitosa serie televisiva de RTVE iniciada en el año 2001, para constatar el paradigma del determinismo económico— llamada también *la teoría del SEAT 600*, por el modelo de coche más popular de la incipiente automoción de masas —que asocia la democracia al desarrollo del capitalismo. No obstante, el flamante *desarrollismo* franquista (el milagro económico de los años sesenta) era un gigante con los pies de barro que se vino abajo, primero, por la escalada en el precio del barril de petróleo iniciado en el año 1973, y, segundo, por la arrogancia del propio Gobierno que despreciaba las medidas drásticas de ahorro tomadas por los países europeos. También es verdad que, en plena decadencia física del dictador que aventuraba un final no muy lejano, la clase dirigente franquista no estaba en condiciones de amargar el dulce del sueño desarrollista vendido a bombo y platillo al sufrido pueblo español.

La Transición, como el periodo democrático precedente (la Segunda República), transitó en medio de fuertes turbulencias generadas por una acentuada crisis económica.

3 *Antonio Gramsci*, Antología. Madrid 2013. Se trata de la selección, traducción y notas realizada por el filósofo marxista Manuel Sacristán en 1970 para la editorial Siglo XXI Editores.

4 El papel jugado por la Internacional socialista y, en particular, por el SPD alemán puede seguirse en Abdón Mateos y Antonio Muñoz (eds.), *Transición y democracia. Los socialistas en España y Portugal*. Madrid 2015.

5 El papel jugado por los estadounidenses queda reflejado en *Charles Powell*, *El amigo americano. España y los Estados Unidos: de la dictadura a la democracia*. Barcelona 2011.

Tras un crecimiento espectacular del PIB en los años 1962–1973, con una media anual del 7%, en los años de la Transición la desaceleración reduce la media anual al 1,3%, con un frenazo el año 1979 que pone el marcador a cero e incluso con un ligero retroceso del 0,2% dos años más tarde. La devaluación de la moneda, para favorecer las exportaciones y dificultar las importaciones, sobre todo de bienes de consumo, fue inevitable pasando de las 57 pesetas por dólar de 1975 a las 110 de 1982. La escalada vertiginosa continuaría y, tres años después, el cambio del dólar rozaría las 200 pesetas. Los Pactos de la Moncloa, firmados por las fuerzas políticas en octubre de 1977, consiguieron estabilizar la inflación alrededor del 14% tras haberse disparado al 26% en ese mismo año. El gran perdedor de la estabilización económica fue el paro que se multiplicó por cuatro hasta alcanzar un 16% de la población activa, con lo cual se entiende que la promesa de crear 800.000 puestos de trabajo fuera una de las propuestas estrellas del programa electoral del PSOE en el año 1982. A pesar que el PCE redondeó la cifra hasta el millón, el descalabro electoral fue antológico provocando prácticamente su desaparición del Congreso de los Diputados, así como la renuncia del liderazgo de Santiago Carrillo. En 1982 estaba en juego mucho más que el crecimiento económico. Las elecciones fueron un plebiscito a favor del proceso de cambio democrático amenazado por el golpe de Estado del 23-F (de 1981) y de una nueva intentona desarticulada la propia vigilia electoral, el 27 de octubre de 1982. El PSOE, con diez millones de votos y 202 diputados sobre un total de 350, aglutinó los votos de cambio en medio del naufragio centrista y comunista, sumidos en disputas internas y diversas escisiones. Una vez más el resultado de unas elecciones, éstas plenamente democráticas y con una participación del 80% del electorado, darían un empujón decisivo a la consolidación de la democracia en España.

La Guerra Civil no era un hecho del pasado sino de un presente traumatizado por su recuerdo permanente. En este sentido, el paradigma explicativo de la amnesia resulta falso. El diagnóstico más preciso sería la neurosis, el dolor intenso por un recuerdo que nos hace daño. Con lo cual no se trata tanto de explicar lo que sucedió sino de reparar moralmente a los vencidos del conflicto fratricida y a los represaliados por la dictadura que, tal como hemos avanzado, no fue una prioridad institucional en la construcción de la democracia española salvo la emprendida, con más o menos intensidad, por los ayuntamientos gobernados por las fuerzas democráticas y, principalmente, de izquierdas.

La sombra alargada de unas Fuerzas Armadas profundamente franquistas (todos los altos mandos debían sus galones a su actuación represiva en la Guerra Civil y la Dictadura) sobrevoló amenazante durante toda la Transición y sólo empezó a perder garra tras el fallido golpe de Estado del 23-F de 1981. Hasta el propio Antonio Tejero Molina, el protagonista televisivo de la entrada, pistola en mano, en el hemiciclo parlamentario, reconoció su percepción errónea de la voluntad popular tras recabar un apoyo electoral de 28.451 votos (el 0,14%) en toda España por la candidatura Solidaridad Española, que el mismo encabezaba, en las elecciones de 1982. El varapalo fue demoledor para Tejero, que substituyó la pistola por los pinceles en una reclusión más bien cómoda, y el resto de *salvapatrias* uniformados. La estrategia de la tensión espoleada con el grito de «Ejército al poder», jaleado ante las numerosas víctimas del terrorismo de ETA y, en menor medida, del GRAPO, fue perdiendo fuelle con el temple de la sociedad española y con la consolidación de la democracia. Y, también cabe decirlo, por la férrea disciplina de la mayoría de los militares ligada a su lealtad y obediencia al Rey, tal como les había ordenado Franco. En estos años, los militares no eran demócratas, ni constitucionalistas, sino simplemente *juancarlistas*,



por franquistas. En cinco palabras: «Lo que mande el Rey», tal como se pudo comprobar la angustiosa noche del 23-F.<sup>6</sup>

La violencia política impregnó la Transición dejando un rastro sangriento de más de 600 muertos, miles de heridos (mutilados o que necesitaron atención hospitalaria), y de muchos más a quienes nunca se les quitó el miedo del cuerpo de unas manifestaciones que acababan casi siempre con la intervención de las Fuerzas de Orden Público.<sup>7</sup> En el crucial año de 1977, el 76,6% de las manifestaciones (788 de un total de 1028), según la Memoria de la Fiscalía del Reino, acabaron dispersadas por los antidisturbios.<sup>8</sup> Ese mismo año, la impresionante (y legal, por supuesto) manifestación de la Diada Nacional de Catalunya (el 11 de septiembre) se saldó con un muerto, al que habría que añadir otro al año siguiente. La violencia desatada por la extrema derecha, amparada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y la respuesta represiva de las autoridades gubernativas ante el aumento de la conflictividad obrera y ciudadana caldeó las calles y plazas, los polígonos industriales y los campus universitarios. La visión edulcorada de la Transición plasmada en muchas memorias y, de una manera especial, en el relato oficial difundido, publicado y filmado, dista mucho de la realidad que vivieron, por lo menos, los antifranquistas militantes.

Franco murió en la cama pero el franquismo murió en la calle. La unidad de la oposición alrededor de Coordinación Democrática y la movilización laboral y ciudadana hicieron inviable la continuidad del régimen franquista en la primera mitad del año 1976. No obstante, la nueva apuesta del Rey por Adolfo Suárez<sup>9</sup> como nuevo presidente del Gobierno consiguió lo que parecía imposible pasar a la ofensiva con la aprobación de la Ley para la Reforma Política y derrotar a los inmovilistas (el llamado búnker) en el referéndum del 15 de diciembre de 1976 dejando a la oposición, que había pedido la abstención en la consulta, en una situación subordinada y sin poder de negociación. Suárez impuso el marco del proceso electoral, con centenares de presos políticos<sup>10</sup> y los partidos a la izquierda del PSOE, republicanos o carlistas, sin legalizar, y, de una manera especial y determinante, el sistema electoral que consagraba el bipartidismo imperfecto con la presencia de los partidos nacionalistas peri-

6 La mejor aproximación al golpe del 23-F sigue siendo la obra del exmilitar y profesor de Derecho Constitucional *Javier Fernández López*, *Diecisiete horas y media. El enigma del 23-F*. Madrid 2000. Una aproximación literaria, pero con una sólida base documental, se puede leer en *Javier Cercas*, *Anatomía de un instante*. Madrid 2009.

7 Ignacio Sánchez-Cuenca en el artículo «La violencia terrorista en la transición española a la democracia» (*Historia del Presente*, nº 14, 2009) establece la cifra de 647 víctimas mortales, 485 de atentados terroristas (354 atribuidas a ETA) y 162 a la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Más recientemente, Sophie Baby aumenta la cifra a 714, 536 a la denominada «violencia contestataria» y 178 al Estado: *Sophie Baby*, *Le mythe de la transition pacifique. Violence et politique en Espagne (1975–1982)*. Madrid 2012.

8 *David Ballester y Manuel Vicente*, *Corre, Democràcia, Corre. Manifestacions i repressió policial a la Catalunya de la Transició (1975–1980)*. Barcelona 2019. Los autores subrayan que «A pesar de los cambios acaecidos, entre febrero y marzo de 1977 aún fueron detenidos 2.745 ciudadanos por motivos sociopolíticos, según cifras del mismo Ministerio de la Gobernación. Y hasta la celebración de las elecciones, el 15 de junio, todavía fueron detenidas 2.834 personas más».

9 La figura política del presidente Adolfo Suárez con el tiempo, como el buen vino, gana solidez en la historiografía española. Véase *Juan Francisco Fuentes*, *Adolfo Suárez. Biografía política*. Barcelona 2011.

10 El indulto, que no amnistía, otorgado por Adolfo Suárez en julio de 1976 excluía a los condenados por banda armada y terrorismo. No fue hasta la Ley de amnistía aprobada (con la abstención de Alianza Popular, la coalición franquista encabezada por Manuel Fraga) por las nuevas Cortes, el 15 de octubre de 1977, que pudieron salir a la calle, principalmente, los militantes de ETA.

féricos, especialmente catalanes y vascos. Todo indica que antes se procederá a la reforma constitucional que a la reforma de la Ley electoral establecida por el Real Decreto-Ley de 18 de marzo de 1977, que establecía la provincia como distrito electoral, con una prima inicial de dos escaños para el Congreso independientemente de la población y una proporcionalidad restrictiva y beneficiaria para las candidaturas mayoritarias a partir de la aplicación del conocido, centenario y popularizado, Sistema d'Hondt, que se generalizaría en el resto de procesos electorales, autonómicos y municipales. Visto lo visto, extraña que no se hayan levantado todavía monumentos en memoria del jurista belga Víctor d'Hondt. Para el Senado se estableció cuatro senadores por provincia y el sistema mayoritario con listas abiertas y una elección máxima de tres candidatos por elector, con lo cual se abría las puertas a una representación minoritaria de la segunda fuerza política. La función conservadora y vigilante, de segunda lectura legislativa, de la llamada Cámara Alta también fue reforzada por la designación real de una quinta parte de sus miembros. El Rey votó, con la relación de los 41 senadores designados, por primera y única vez en una consulta partidaria y, además, pudimos conocer sus preferencias ideológicas decantadas mucho más a la derecha que la expresada aquel día por el pueblo español.

La Ley para la Reforma Política, inspirada en el axioma «de la ley a la ley a través de la ley» de Torcuato Fernández Miranda, era necesaria pero no suficiente para garantizar el cambio democrático. Las elecciones del 15 de junio de 1977 no se convocaron con carácter constituyente y, además, cuando se utiliza, en la mencionada Ley y en el programa electoral del presidente Suárez, la expresión de reforma de la Constitución hace referencia en aquel contexto a las Leyes Fundamentales del Movimiento, las cuales no serán derogadas de forma explícita hasta la aprobación de la Constitución de 1978 empezando por la propia Ley para la Reforma Política, considerada jurídicamente como la octava ley de las Leyes Fundamentales del Régimen franquista. Ni el marco legal, ni el control total y absoluto del proceso electoral por parte del Gobierno— desde los poderosos medios de comunicación de titularidad pública (incluido el único canal televisivo) y la subordinación y castración informativa de los medios radiofónicos privados obligados (hasta el mes de octubre de 1977) a conectar con los informativos públicos, hasta la totalidad de la administración pública y electoral, —ni la exclusión de facto de los ochocientos mil residentes en el extranjero, ni los múltiples errores (bajo sospecha de clara manipulación) del censo y de las actas electorales, ni la falta de resultados oficiales de actas de escrutinio por un total de más de 400.000 electores (un 2,5% del total), ni los partidos sin legalizar obligados a presentarse bajo la fórmula de agrupaciones de electores, ni los presos políticos, ni... permiten otorgar el calificativo de democráticas a estas primeras elecciones generales libres.<sup>11</sup> Cabe subrayar que los comunistas (PCE-PSUC) impusieron su tardía legalización y que debemos a la tarea, esta si heroica y digna de reconocimiento, de los interventores y apoderados de las candidaturas democráticas la mayor limpieza y transparencia en la plasmación de la voluntad real de los ciudadanos y ciudadanas. Aquella noche la celebración de los resultados fue en la intimidad de los locales de partido o sedes electorales ya que la presencia en las calles se prohibió a grupos de más de cincuenta personas (en Barcelona hubo dos cargas policiales en las Ramblas), unas medidas anunciadas el día de reflexión por televisión por el vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado, vestido de

11 Este argumento se sustenta fundamentalmente en mi libro: *Andreu Mayayo i Artal, La ruptura catalana. Les eleccions del 15-J de 1977 a Catalunya*. Catarroja 2002.

militar y con toda solemnidad, al desgranar el contenido de la Operación Ariete.<sup>12</sup> Un aviso claro y contundente para navegantes dirigido a las fuerzas políticas catalanas para que tuvieran en cuenta que su previsible triunfo esta vez no conduciría a los balcones de las instituciones de la Plaza de Sant Jaume y, mucho menos, conseguirían alterar el ordenamiento jurídico vigente.

El factor fundamental y determinante de las elecciones del 15-J fueron los resultados, que fueron acogidos con sorpresa, contrariedad y preocupación, por el propio Gobierno, que no daba crédito a la obtención de una escasa tercera parte de los votos válidos lejos de la prevista mayoría absoluta. La oposición, a pesar de todo lo dicho, los dio por buenos dándose por satisfecha ya que recuperaba la iniciativa y obligaba a pactar al Gobierno la ruptura democrática con el Régimen franquista. En este sentido, las tres principales consecuencias del resultado fueron: en primer lugar, la Ley de Amnistía, aprobada con celeridad el 14 de octubre; en segundo lugar, los Pactos de la Moncloa, rubricados el mismo mes, que no tan sólo intentaban estabilizar la economía sino implementar una serie de medidas políticas siendo la de mayor calado la apertura, ahora sí sin tapujos, de un proceso constituyente a partir de una propuesta parlamentaria (no gubernamental) de amplio consenso; y en tercer lugar, el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña y el retorno del exilio del presidente Josep Tarradellas que ostentaba la legitimidad histórica, tras un resultado abrumador de cerca del 80% que sumaban las candidaturas contrarias a la creación (en el mes de febrero) del Consejo General de Cataluña, una especie de Mancomunidad de naturaleza administrativa de las cuatro provincias catalanes sin ningún poder legislativo ni, mucho menos, reconocimiento simbólico de la identidad nacional catalana. La conocida como «Operación Tarradellas» emprendida con audacia por el presidente Suárez conseguía, por una parte, aguar la victoria de la izquierda (la famosa «mancha roja») y, por la otra, legitimar indirectamente a la monarquía que reconocía la institución histórica de la Generalitat ligada a la legalidad de la Segunda República. Con la legalización del Partido Comunista y de la Generalitat de Catalunya, los dos factores netamente rupturistas de la Transición, la monarquía daba señales de su aceptación de convertirse en una monarquía parlamentaria— en donde el rey reina pero no gobierna —facilitando su legitimación en la futura Constitución.

Barcelona se convirtió en la capital de la Transición y los catalanes, una vez más, la punta de lanza de un nuevo proyecto— español— por supuesto —democrático y de superación del centralismo estatal. La hegemonía del antifranquismo catalán con una prestigiosa y poderosa plataforma unitaria, la *Asamblea de Catalunya* creada en el año 1971, de fuerzas políticas y movimientos sociales había tejido complicidades con el resto de fuerzas políticas y organismos de la oposición democrática española. Si en el año 1930 se consiguió, en el famoso Pacto de San Sebastián entre las fuerzas republicanas, el reconocimiento del derecho al autogobierno, ahora conseguía que Coordinación Democrática, la gran plataforma unitaria de partidos españoles creada en marzo de 1976, incluyera en uno de sus puntos fundacionales el derecho al autogobierno «de las nacionalidades y regiones del Estado español». Con este concepto, que sería el que se acabaría introduciendo en el artículo segundo de la Constitución, se reconocía por primera vez el carácter plurinacional de España. Así mismo, la Asamblea de Parlamentarios, constituida el 25 de junio por diputados y senadores catalanes electos y designados por el Rey, aprobaba el derecho a la autonomía de todas las nacionalidades y re-

12 La Operación Ariete movilizaba a las Fuerzas Armadas en las tareas de control y seguridad públicas reforzando a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

giones del Estado español. El espíritu del pacto era evidente: España reconocía su pluralidad nacional y, por consiguiente la singularidad (asimetría) catalana (también vasca y gallega) y Cataluña aceptaba la generalización del derecho al autogobierno de las regiones.

El espíritu y la letra de la Constitución de 1978 constituyen un triunfo de la izquierda.<sup>13</sup> Más allá del amplio reconocimiento de los derechos individuales y sociales o el mismo derecho a la autonomía, la Constitución supera con un proyecto inclusivo la división franquista entre vencedores y vencidos enterrando el espectro guerra civilista. Así mismo, se trata de una Constitución abierta y flexible, a veces, demasiado ambigua, que permite gobernar a un amplio abanico de fuerzas políticas y poder plasmar sus propuestas programáticas. Finalmente, con la vista puesta en nuestra historia constitucional convulsa, expresa el mandato de perdurabilidad, de no cambiar la Constitución sino de reformarla para adaptarla y que continúe siendo útil a las futuras generaciones, aunque para ello exige unas mayorías calificadas difíciles de obtener, sobre todo, si las fuerzas políticas constituyentes desaparecen o mutan en otras donde impera una cultura política profundamente polarizada y divisiva— una vez más, entre vencedores y vencidos —alérgica y reacia al acuerdo, visto como una debilidad cuando no, directamente, una traición.

Más allá del Gobierno y, principalmente, de su presidente Adolfo Suárez, los partidos, sindicatos y movimientos sociales antifranquistas, fueron los grandes protagonistas de la campaña a favor del SI a la Constitución. Merece la pena subrayar la gran movilización de los jóvenes que habían conseguido plasmar su gran reivindicación en el artículo 12 del texto constitucional que sancionaba la mayoría de edad (y por consiguiente el derecho de voto) a los 18 años. Los jóvenes de 18 a 21 años habían quedado excluidos de la participación electoral en las elecciones del 15 de junio de 1977. Las encuestas que manejaban los asesores de Suárez daban una proporción de dos a una las preferencias a la izquierda respecto a la derecha. Los jóvenes españoles era el segmento de población más dispuesto a dejar atrás la dictadura y la moral del nacionalcatolicismo. Incluso de manera sorprendente para los encuestadores en busca del perfil más sociológico y de valores con finalidades más comerciales que políticas, los jóvenes españoles urbanos (residentes en Madrid y Barcelona) resultaban mucho más «progres» en relación a temas como la sexualidad o los roles de género, más permisivos con las drogas, el divorcio y el aborto. En definitiva, los jóvenes eran un factor social, político y electoral, claro a favor de la ruptura democrática y, la cohorte entre los 18 y los 21 años, representaban más del 10% del censo electoral. De esta manera el censo electoral, respecto a las elecciones generales, pasó de los 23,6 a los 26,6 millones de electores. Por la misma razón que el presidente Suárez no aceptó la participación electoral de los jóvenes menores de 21 años en las elecciones del 15-J, aprovechó su voluntad de cambio para apuntalar el Si a la Constitución. El ejemplo de los jóvenes subraya, una vez más, la teoría de la revolución

13 El catedrático de Derecho Constitucional Jordi Solé Tura fue ponente en la redacción de la Constitución por el Grupo Comunista (PCE-PSUC) y ha desarrollado una labor académica reconocida internacionalmente sobre la Constitución de 1978 con muchos de sus libros traducidos en varias lenguas. Me gustaría referirme aquí a una visión más política y coetánea a su elaboración que, de una manera u otra, exponía el posicionamiento del PCE y del PSUC: *Jordi Solé Tura, Los comunistas y la Constitución*. Madrid 1978. Recientemente, coincidiendo con el 40 aniversario de la Carta Magna española y los debates sobre la necesidad de cambio o reforma, la Fundación Nous Horitzons, heredera del PSUC y situada ahora en el espacio político del Partido Verde Europeo y de Catalunya en Comú (la referencia política catalana de Unidos Podemos), ha publicado un número monográfico de su revista con valiosas contribuciones: 40 anys de Constitució: una revisió crítica, *Nous Horitzons*, núm 220, Barcelona 2018.

pasiva, un cambio democrático empujado desde la sociedad pilotado por políticos procedentes de las instituciones franquistas. No era necesaria la mayoría de edad, como se aducía para negar esta posibilidad en las elecciones generales del año anterior, sino simplemente su inclusión en el decreto-ley de normas electorales. Así, por decreto-ley, los jóvenes a partir de los 18 años pudimos ejercitar el derecho al sufragio en el mismo referéndum aprobatorio de la Carta Magna.

El análisis de los resultados del referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978 confirma el apoyo mayoritario de las fuerzas de izquierda contra una parte remisa y beligerante de la derecha posfranquista, como se trasluce en Galicia (con un 50% de abstención) y en la provincia de Madrid (con más del 10% de votos negativos, el doble que Cataluña). La excepción fue Euskadi (no Navarra), con un escaso 45% de participación y un 23,5% de votos negativos, debido al rechazo de las fuerzas políticas nacionalistas, tanto de derechas como de izquierdas, y, en particular, del propio Partido Nacionalista Vasco, de carácter democristiano. A la abstención rozando el 60% de Guipúzcoa y de Vizcaya, cabe añadir el rechazo de un 30% y de un 20%, respectivamente, de los votantes. Por el contrario, la participación y los votos afirmativos en Cataluña superan la media española destacando el bajo porcentaje (sólo superado por Canarias) de votos negativos. El análisis microscópico de mesas, municipios y comarcas, no deja lugar a dudas. La ciudad de Barcelona es un buen ejemplo: mientras la Constitución es respaldada en mayor proporción en los barrios populares con una amplia mayoría de izquierdas (superando el 60% del censo en los distritos de Sant Martí, Sant Andreu y Nou Barris) en aquéllos de rentas más altas obtiene sus peores resultados (Sarrià-Sant Gervasi es el único distrito donde los votos afirmativos no llegan al 50% del censo electoral). Lo mismo sucederá al año siguiente con la aprobación del Estatuto de Autonomía. Por cierto, con un menor apoyo que en el caso de la comunidad autónoma vasca donde el PNV y parte de la izquierda vasca (Euskadiko Ezquerria) defenderán sin tapujos el Estatuto de Guernika, con lo cual se incorporan de lleno en el llamado bloque constitucional constituido por la Constitución y los estatutos de autonomía.

El caso de José María Aznar es paradigmático del rechazo de un sector de jóvenes procedentes del franquismo sociológico<sup>14</sup> y del falangismo ideológico. La impugnación del espíritu y de la letra del texto constitucional lleva al joven madrileño, al poco de iniciar su carrera funcional como inspector de Hacienda en Logroño (la Rioja), a iniciar su militancia en la postfranquista Alianza Popular, siguiendo los pasos de su compañera de estudios y esposa Ana Botella, criticando a la UCD del presidente Suárez en una serie de artículos publicados en el diario *La Nueva Rioja*. En el segundo artículo aparecido el 23 de febrero de 1979, José María Aznar torpedeaba la línea de flotación de la Constitución abjurando de la política de consenso propiciada por las fuerzas democráticas y aceptada de buena gana por el Gobierno. En este sentido, opinaba que el consenso había provocado «la desconfianza de una enorme masa de españoles en el buen funcionamiento del sistema democrático». La desconfianza, a su parecer, se había plasmada en el alto índice de abstención, lo cual le llevaba a subrayar y aplaudir aquéllos que habían dado la espalda a las urnas. En conclusión: «En determinadas ocasiones, la abstención puede estar justificada, incluso puede el caso (sic) de una abstención beligerante como en el pasado referéndum constitucional». Cómo se podía apoyar un texto

14 Franquismo sociológico es una expresión utilizada para evidenciar la pervivencia de rasgos sociales propios del franquismo en la sociedad española posterior a la muerte de Franco. Políticamente, aquellos que están de acuerdo en una liberalización del Régimen pero se oponen al cambio democrático.

que, a diferencia del franquismo que dejaba todo atado y bien atado, abría tantas puertas y permitía una interpretación flexible para que tuvieran cabida programas de gobierno de diferentes y distintas fuerzas políticas. El blanco y negro se imponía en el pensamiento poco sutil de un joven Aznar que, pocos años más tarde, elegiría el Cid Campeador, un guerrero, que combate, antes que a un político, que pacta, como personaje histórico favorito: «Tal como está redactada la Constitución, los españoles no sabemos si nuestra economía va a ser de libre mercado o por el contrario va a deslizarse por peligrosas pendientes estatificadoras y socializantes; si vamos a poder escoger libremente la enseñanza que vamos a dar a nuestros hijos o nos encaminamos hacia la escuela única; si el desarrollo de las autonomías va a realizarse con criterios de unidad y solidaridad o prevalecerán las tendencias gravemente disolventes agazapadas en el término nacionalidades».<sup>15</sup>

A pesar del revés electoral sufrido por Alianza Popular, en las segundas elecciones generales de marzo y las primeras elecciones municipales de abril de 1979, José María Aznar no abandonó el barco pilotado por Manuel Fraga y continuó su cruzada periodística, ahora contra los nuevos ayuntamientos democráticos. En un artículo publicado el día 9 de mayo (siempre en Nueva Rioja) atribuía a vientos de revancha el cambio de nombres de calles y plazas dedicadas al Generalísimo Franco y al fundador de falange José Antonio Primo de Rivera. El ayuntamiento de Gernika, señalaba Aznar, «aprueba por unanimidad retirar la medalla de la villa así como todos los honores concedidos al anterior Jefe del Estado, que aunque moleste a muchos gobernó durante 40 años y se llamaba Francisco Franco [...] En Coslada (Madrid), las calles dedicadas a Franco y José Antonio lo estarán a partir de ahora a la Constitución. Y no hemos hecho más que comenzar...».<sup>16</sup> No se trataba tan sólo de defender la memoria histórica del franquismo sino su concepción sobre la organización política y, sobre todo, territorial. En otro artículo, en mayo de 1979, dejaba clara cuál era su verdadera opinión sobre el llamado Estado de las Autonomías: «En lugar de concebir un plan serio y razonable de organización territorial de España, se ha montado una charlotada intolerable que ofende al buen sentido».<sup>17</sup> Una cuestión que, con el tiempo, se convertiría en su principal bestia negra y que contaminó la política futura del Partido Popular. José María Aznar nunca aceptó el espíritu del artículo segundo y del Título VIII de la Constitución que no tan sólo reconocía el derecho a la autonomía de las regiones y de las nacionalidades sino la defensa y promoción, por constitucional y españolas, de las diversas lenguas y culturas que conforman el Reino de España.

La Constitución no es solo un texto sino fundamentalmente su interpretación y su aplicación. El golpe de timón anunciado por los golpistas el 23-F tuvo como consecuencia una interpretación restrictiva del estado de las autonomías por parte de las fuerzas políticas procedentes del centralismo franquista (UCD y AP) pero también, y esta es la novedad, del principal partido de izquierdas, el PSOE, que dejaba en papel mojado no tan sólo el derecho a la autodeterminación de los pueblos de España defendido por el partido sino una concepción de una España plurinacional con una organización federal. La España de naciones pregonada por dirigentes históricos como Anselmo Carretero. Un acuerdo que se plasmó

15 *José M<sup>a</sup> Aznar*, La abstención. La lección de la Historia, en: La Nueva Rioja, 23.02.1979. Aznar pone dos ejemplos que la abstención de la derecha propicia la victoria de la izquierda: las elecciones de febrero de 1936 que, con un índice del 30% de abstención, vencieron las candidaturas del Frente Popular (entonces no culpaba a la izquierda de pucherazo) y el triunfo en 1970 de la Unidad Popular en Chile.

16 *José M<sup>a</sup> Aznar*, Vientos que destruyen, en: La Nueva Rioja, 9.05.1979.

17 *José M<sup>a</sup> Aznar*, Unidad y Grandeza, en: La Nueva Rioja, 30.05.1979.

con la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) el 30 de julio de 1982. Comunistas (PCE-PSUC) y nacionalistas catalanes (CiU) y vascos (PNV) pusieron el grito en el cielo y presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. A pesar que, años después, el Alto Tribunal les dio la razón en los aspectos fundamentales que, de facto, desactivaban las pretensiones recentralizadoras de la Ley, las fuerzas centrales de la política española (PSOE y, posteriormente, PP) mantuvieron un resquemor ante el desarrollo autonómico y, en particular, de las singularidades de las nacionalidades históricas. Un desarrollo que se desbloqueaba ante la necesidad de obtener los apoyos imprescindibles de los nacionalistas catalanes y vascos por parte del PSOE o del PP ante la falta de mayoría absoluta en el Parlamento, lo cual avalaba el relato chantajista de las nacionalidades históricas y de agravios comparativos territoriales. Este fue el escenario de la negociación y aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 impulsado por el gobierno catalanista y de izquierdas, presidido por Pasqual Maragall.

La experiencia histórica del Estatuto de Autonomía de 1932 (primero plebiscito del llamado Estatuto de Núria y luego aprobación, con modificaciones, en las Cortes) aconsejó a los constituyentes a establecer un procedimiento de discusión y aprobación, parlamentaria y popular, diferente. El objetivo era que el referéndum de carácter vinculante se realizara no sobre los deseos de la comunidad autónoma sino sobre el pacto entre la Comunidad Autónoma y el Estado. De esta manera, el Parlamento autonómico aprobaba una propuesta por mayoría de dos tercios de la cámara, luego tenía lugar el pacto con el Estado a través de la discusión y, si se aceptaban las modificaciones introducidas, aprobación de las Cortes para su posterior referendo por los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma. El Estatuto era aprobado, sin especificar el quórum de participación ni porcentaje de votos afirmativos, por mayoría simple.

El nuevo estatuto catalán de 2006 abrió la caja (o tinaja) de Pandora en el modelo territorial español (el Estado de las Autonomías), rompió el consenso político entre el PSOE y el PP y, a la postre, deslegitimó al Tribunal Constitucional. Un estropicio de consecuencias todavía incalculables, que ha provocado una avería importante en el sistema político y constitucional español. La cadena de errores empezó en la misma ambición de un proyecto de Estatuto que, según los expertos, implicaba una reforma constitucional. El partido de Jordi Pujol (*Convergència i Unió*), que siempre había preferido aprovechar las debilidades de la política española para incrementar el autogobierno (las competencias y recursos) antes que la aprobación de un nuevo Estatuto, que reflejara la identidad nacional de Cataluña, blindara las competencias y recursos y ampliara los derechos de los ciudadanos, condicionó su apoyo a una propuesta de máximos. CiU, que era la primera fuerza parlamentaria y la fuerza política que se identificaba emocionalmente con Cataluña, aceptó de mala gana la formación de un Gobierno de coalición de izquierdas, que lo relegaba a la oposición después de 23 años, desde el mismo inicio de la recuperación del autogobierno. Artur Mas, el líder de CiU, se sintió despedido y apuntó con el dedo a Esquerra Republicana de Catalunya, los nacionalistas de izquierdas. Su objetivo en la discusión estatutaria era desestabilizar el gobierno de la Generalitat presionando a ERC con una mayor ambición soberanista.<sup>18</sup> La aprobación del proyecto de Estatuto por el Parlamento catalán el 30 de septiembre de 2005 por 120 votos a favor y 15 en contra (del PP) esconde las dificultades de acomodar el texto a la Constitución vigente y, por consiguiente, generar una profunda frustración en la sociedad catalana tanto con su

18 Jordi Amat, *El llarg procés: cultura i política a la Catalunya contemporània (1937–2014)*. Barcelona 2015.

gobierno como con el gobierno del Estado, presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que se había comprometido públicamente a apoyar el proyecto de Estatuto surgido del Parlamento de Cataluña.

En el mes de enero de 2006, el presidente Zapatero se reúne con Artur Mas (líder de la oposición en Cataluña), a espaldas del presidente socialista de la Generalitat Pasqual Maragall, para desbloquear la aprobación del Estatuto. Mas acepta rebajar la ambición del autogobierno a cambio de facilitar su investidura a la presidencia de la Generalitat en las elecciones siguientes. En pocas palabras: Zapatero sacrifica a Maragall y el *Partit dels Socialistes de Catalunya* (PSC, el partido hermano del PSOE) y Mas le respalda en la política española. Empiezan los primeros estropicios: ERC se rasga las vestiduras y rechaza apoyar el texto estatutario aprobado por las Cortes por insuficiente (ERC y PP, por motivos opuestos, pedirán el No en el referéndum), Maragall los expulsa del Gobierno y nombra para substituirlos a personas de su confianza sin consultar a su propio partido (PSC), y Artur Mas se frota las manos pensando en las próximas elecciones. El Referéndum dejará tocado el Estatuto y empezará a volar con plomo en las alas tras una participación inferior al 50% del censo electoral y el rechazo de uno de cada cuatro votantes. Una presa fácil para las gaviotas (símbolo del partido) del PP que se lanzarán sin piedad recogiendo más de cuatro millones de firmas por toda España para interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

La reedición de un nuevo gobierno de coalición de izquierdas en Cataluña tras las elecciones de noviembre de 2006, ahora presidido por el socialista José Montilla, provoca una nueva y más hiriente frustración de Artur Mas, que continúa siendo la principal fuerza política del Parlamento. Mas se siente traicionado por Zapatero y en su despecho estimulará las movilizaciones no sólo contra el gobierno de la Generalitat sino también contra el gobierno socialista español aprovechando la *catalanofobia* generada por la campaña de recogida de firmas del PP y las declaraciones de algunos barones territoriales (algunos presidentes de comunidades autónomas) del PSOE. La exclusión de facto del PP, como quedó explícito en el *Pacto del Tinell*<sup>19</sup> (2003) de la coalición de izquierdas catalanas, puede explicar pero no justificar el recurso a la *catalanofobia* ya que ni el PP ni parte de la sociedad española se moviliza contra los proyectos de estatutos de autonomía de otras comunidades con idénticos articulados copiados del estatuto catalán. De estos polvos vendrán los lodos del *procés*, del movimiento independentista catalán. El propio presidente Montilla (2006–2010) ya advertirá de la profunda y creciente desafección de la sociedad catalana, que contempla con estupor el paso de la *catalanofilia* de la Transición y de la presidencia de Felipe González, con los Juegos Olímpicos de Barcelona (1992) como bandera, a la *catalanofobia* del siglo XXI. Al error del gobierno catalán de izquierdas y del gobierno socialista español presidido por Zapatero de actualizar el modelo territorial, a través de las nuevas propuestas estatutarias, sin acuerdo entre las dos fuerzas políticas centrales españolas (PSOE-PP) y, por consiguiente, sin posibilidad de reformar la Constitución, cabe añadir el error del PP de trasladar la conflictividad política al seno del Tribunal Constitucional deslegitimando a miembros progresistas, paralizando su renovación y, a la postre, obligando a intervenir en el conflicto estatutario catalán en una situación más que precaria. Suprimido el recurso previo de inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional<sup>20</sup> se ve impelido por el recurso del PP a dictaminar sobre

19 El acuerdo establecía el compromiso crear un Gobierno catalanista y de izquierdas firmado por Pasqual Maragall (socialista), Josep-Lluís Carod-Rovira (republicano) y Joan Saura (ecosocialista).

20 Los constituyentes de 1977– en primer lugar, los catalanes –tuvieron en mente la experiencia estatu-



el Estatuto catalán cuatro años después de su aprobación y entrada en vigor. La sentencia de junio de 2010 supone un duro golpe para el constitucionalismo español no tanto por el contenido sino por la forma, es decir, no tanto por sus objeciones al texto sino por su intervención a posteriori del pacto político plasmado en las Cortes y del referendo vinculante de la ciudadanía. Las explicaciones bondadosas respecto a un texto final que mejoraba el texto estatutario de 1979 se estrellaron contra un malestar profundo por las demandas de reconocimiento identitario (nacional) rechazadas y, sobre todo, por el agravio comparativo respecto a competencias denegadas vigentes en otros textos estatutarios. Con lo cual no quedaba otra solución política satisfactoria que reformar la Constitución para acomodar el contenido del acuerdo político aprobado por las Cortes y sancionado por los catalanes. El problema era que el acuerdo político se había obtenido por mayoría absoluta y la reforma constitucional necesitaba una mayoría cualificada difícil, por no decir imposible, de conseguir sin la participación del PP. Obturada la vía política y con la ola creciente de la crisis económica, el nacionalismo conservador y pactista se transforma en neoliberal e independentista. Pero esto ya es otra historia, la historia de la mayor crisis política y constitucional de nuestra joven democracia. La historia de nuestro presente con un futuro incierto y que pondrá a prueba la vitalidad de la Constitución para facilitar la solución política (y no sólo judicial) del modelo de poder territorial en el marco de una Unión Europea de soberanías compartidas, estado del bienestar y diversidad lingüística y cultural, en donde lo viejo, los estados nación, no acaban de morir, y lo nuevo, el poder de las metrópolis no acaba de nacer.

En el siglo XX el mundo nos ha mirado atentamente en dos ocasiones: en la primera, la Guerra Civil, con horror y, en la segunda, la Transición, con admiración. Mientras en la tragedia de la Guerra Civil ningún dirigente político ha querido reflejarse, en la Transición todos han intentado vindicar su protagonismo, a veces exagerando la paternidad en un proceso guiado más desde la improvisación que desde el diseño meticuloso previo. Como dice el refranero castizo: a toro pasado, todos toreros. Quizás sea necesario desplazar el foco de atención de los palacios a la calle, de las instituciones políticas a la sociedad civil, de la política a la cultura, para reconocer y agradecer la enorme generosidad de todos aquellos que pagaron un precio en sus vidas. Quizás, también, deberíamos ser más modestos y aprender de los políticos de la Transición, que supieron poner la divisoria entre los que se aferraban al Régimen franquista y los que empujaron o se dejaron llevar al cambio democrático. Santiago Carrillo lo sintetizó con una enorme visión política (no coartada por el dogmatismo ideológico) cuando sus compañeros de partido le recriminaban el reconocimiento de la monarquía, que la disyuntiva no era entre monarquía y república sino entre dictadura o democracia. Algunos mirando hacia el pasado republicano se convirtieron en estatuas de sal dogmáticas que les

taria republicana para invertir el proceso de aprobación del Estatuto de Autonomía. En la Segunda República Española, Cataluña plebiscitó primero (1931) su propuesta de Estatuto, que luego fue enmendado (con severos recortes identitarios y competenciales) por las Cortes españolas (1932) dejando una sensación de frustración. En este sentido, ahora disponía que la Generalitat aprobara un proyecto, que se discutía y enmendaba en las Cortes, y, posteriormente, se sometía a referéndum en Cataluña el texto del acuerdo político. La intervención a posteriori, tras el referéndum, del Tribunal Constitucional modificaba el pacto político votado por los ciudadanos de Cataluña, con lo cual parecía lógico volver a someterlo a votación y tener la oportunidad de rechazarlo para solicitar un cambio en la Constitución que pudiera contemplar el pacto político acordado por el Parlamento catalán y las Cortes españolas. El recurso previo de inconstitucionalidad para dictaminar los proyectos de los estatutos de autonomía se suprimió en 1985 y, motivado por el caso catalán, se reintrodujo en 2015.

impidieron entender que la república era libertad y democracia y no los colores de una bandera. El dirigente comunista todavía daría muestras de su habilidad política cuando insistía que en una negociación ganaba quien cedía una cosa que no tenía. La República no existía y su espectro, utilizando la leyenda del Cid tan cara a José María Aznar, ganó la batalla de la democracia. La Monarquía parlamentaria de corte europea tranquilizó a una derecha traumatizada por el relato de la Segunda República vista a través de la tragedia de la Guerra Civil y conformó a una izquierda interesada en acabar con la atroz dictadura franquista y abrir las puertas a la democracia y la integración europea. Confíemos que las lecciones de la Historia nos ayuden a encontrar la luz del final del túnel.

Referéndum Constitución Española por Comunidades Autónomas (6 de diciembre de 1978)

	Votantes		Sí		No		Blancos		Nulos		
	Electores	Absolutos	%	Absolutos	%	Absolutos	%	Absolutos	%	Absolutos	%
<b>ESPAÑA</b>	26.632.180	17.873.271	67,1	15.706.078	87,9	1.400.505	7,8	632.902	3,5	133.786	0,7
Andalucía	4.347.542	3.021.794	69,5	2.775.521	91,9	165.882	5,5	62.817	2,1	17.574	0,6
Aragón	894.403	658.075	73,6	579.734	88,1	44.287	6,7	30.624	4,7	3.430	0,5
Asturias	864.796	534.343	61,8	473.348	88,6	44.874	8,4	11.395	2,1	4.726	0,9
Baleares, Islas	450.115	315.891	70,2	282.598	89,5	15.251	4,8	15.394	4,9	2.648	0,8
Canarias	879.963	553.510	62,9	508.668	91,9	24.174	4,4	17.580	3,2	3.088	0,6
Cantabria	374.559	266.514	71,2	222.559	83,5	33.232	12,5	9.150	3,4	1.573	0,6
Castilla-la Mancha	1.207.525	891.382	73,8	751.614	84,3	105.034	11,8	27.801	3,1	6.933	0,8
Castilla-León	1.950.813	1.392.326	71,4	1.184.361	85,1	127.545	9,2	69.245	5,0	11.175	0,8
Cataluña	4.398.173	2.986.726	67,9	2.701.870	90,5	137.845	4,6	126.462	4,2	20.549	0,7
C. Valenciana	2.545.481	1.887.143	74,1	1.676.680	88,8	131.664	7,0	65.010	3,4	13.789	0,7
Extremadura	765.235	539.542	70,5	481.808	89,3	39.637	7,3	14.801	2,7	3.296	0,6
Galicia	2.107.613	1.058.042	50,2	942.097	89,0	61.892	5,8	42.092	4,0	11.961	1,1
Madrid	3.047.226	2.201.102	72,2	1.896.205	86,1	222.638	10,1	66.575	3,0	15.684	0,7
Murcia	630.268	450.242	71,4	408.722	90,8	27.975	6,2	10.975	2,4	2.570	0,6
Navarra	361.243	240.695	66,6	182.207	75,7	40.804	17,0	15.415	6,4	2.269	0,9
País Vasco	1.552.737	693.310	44,7	479.205	69,1	163.191	23,5	39.816	5,7	11.098	1,6
Rioja, la	192.597	139.561	72,5	120.847	86,6	10.940	7,8	6.569	4,7	1.205	0,9
Ceuta	32.488	23.650	72,8	20.849	88,2	1.997	8,4	670	2,8	134	0,6
Melilla	29.403	19.423	66,1	17.185	88,5	1.643	8,5	511	2,6	84	0,4

Fuente: Ministerio del Interior. Datos oficiales proclamados por la Junta Electoral Central.

## **DIE SPANISCHE VERFASSUNG**

Gebilligt durch die Cortes in den am 31. Oktober 1978 abgehaltenen Vollversammlungen des Kongresses der Abgeordneten und des Senats

Ratifiziert vom spanischen Volk durch Referendum vom 6. Dezember 1978

Sanktioniert durch seine Majestät den König vor den Cortes am 27. Dezember 1978



# **Inhaltsverzeichnis**

## **Präambel**

## **Vortitel**

### **Titel 1. Die Grundrechte und -pflichten**

Kapitel I. Spanier und Ausländer

Kapitel II. Rechte und Freiheiten

Abschnitt 1. Die Grundrechte und die öffentlichen Freiheiten

Abschnitt 2. Die Bürgerrechte und -pflichten

Kapitel III. Die Leitprinzipien der Sozial- und Wirtschaftspolitik

Kapitel IV. Die Garantien der Grundfreiheiten und -recht

Kapitel V. Die Aufhebung der Rechte und Freiheiten

### **Titel II. Die Krone**

### **Titel III. Die Cortes Generales**

Kapitel I. Die Kammern

Kapitel II. Die Ausarbeitung der Gesetze

Kapitel III. Die internationalen Verträge

### **Titel IV. Regierung und Verwaltung**

### **Titel V. Die Beziehungen zwischen der Regierung und den Cortes Generales**

### **Titel VI. Die rechtsprechende Gewalt**

### **Titel VII. Wirtschaft und Finanzen**

### **Titel VIII. Die territoriale Gliederung des Staates**

Kapitel I. Allgemeine Grundsätze

Kapitel II. Die Lokalverwaltung

Kapitel III. Die Autonomen Gemeinschaften

### **Titel IV. Das Verfassungsgericht**

### **Titel X. Die Verfassungsreform**

### **Zusatzbestimmungen**

### **Übergangsbestimmungen**

### **Aufhebungsbestimmung**

### **Schlussbestimmung**

Juan Carlos I, König von Spanien, gibt allen, die hiervon Kenntnis erlangen mögen, zu wissen: Dass die nachstehende Verfassung durch die Cortes gebilligt und durch das spanische Volk ratifiziert wurde:

### **PRÄAMBEL**

DIE spanische Nation, von dem Wunsch beseelt, Gerechtigkeit, Freiheit und Sicherheit herzustellen und dem Wohl aller ihrer Bürger förderlich zu sein, verkündet in Ausübung ihrer Souveränität ihren Willen,

DAS demokratische Zusammenleben im Schutze der Verfassung und der Gesetze und im Rahmen einer gerechten Wirtschafts- und Sozialordnung zu gewährleisten;

EINEN Rechtsstaat zu konsolidieren, der die Herrschaft des Gesetzes als Ausdruck des Willens des Volkes gewährleistet;

ALLE Spanier und Völker Spaniens bei der Ausübung der Menschenrechte und bei der Pflege ihrer Kultur und Traditionen, Sprache und Institutionen zu schützen;

DEN Fortschritt von Wirtschaft und Kultur zu fördern, um würdige Lebensverhältnisse für alle zu sichern;

EINE fortgeschrittene, demokratische Gesellschaft zu errichten;

BEI der Vertiefung friedlicher und von guter Zusammenarbeit gekennzeichneter Beziehungen zwischen allen Völkern der Erde mitzuwirken.

KRAFT dessen beschließen die Cortes und ratifiziert das spanische Volk die folgende:

### **VERFASSUNG**

#### **VORTITEL**

Artikel 1.

(1) Spanien konstituiert sich als demokratischer und sozialer Rechtsstaat und bekennt sich zu Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und politischem Pluralismus als obersten Werten seiner Rechtsordnung.

(2) Das spanische Volk, von dem alle Staatsgewalt ausgeht, ist Träger der nationalen Souveränität.

(3) Die Staatsform des spanischen Staates ist die parlamentarische Monarchie.

Artikel 2.

Die Verfassung stützt sich auf die unauflösliche Einheit der spanischen Nation, gemeinsames und unteilbares Vaterland aller Spanier, und anerkennt und gewährleistet das Recht auf Autonomie der Nationalitäten und Regionen, die Bestandteil der Nation sind, und auf die Solidarität zwischen ihnen.

## Artikel 3.

- (1) Das Kastilische ist die offizielle spanische Amtssprache. Alle Spanier haben die Pflicht, sie zu kennen, und das Recht, sie zu benutzen.
- (2) Die weiteren spanischen Sprachen sind in den Autonomen Gemeinschaften und gemäß ihren jeweiligen Statuten ebenfalls offiziell.
- (3) Der Reichtum der sprachlichen Verschiedenheiten Spaniens ist ein Kulturgut, das besonders zu achten und zu schützen ist.

## Artikel 4.

- (1) Die spanische Flagge besteht aus drei Querstreifen: rot, gelb rot; der gelbe Streifen hat die doppelte Breite jedes der roten.
- (2) In den Statuten können eigene Flaggen und Kennzeichen der Autonomen Gemeinschaften anerkannt werden. Sie werden auf und in öffentlichen Gebäuden und bei offiziellen Anlässen zusammen mit der spanischen Fahne gehisst.

## Artikel 5.

Hauptstadt des Staates ist die Stadt Madrid.

## Artikel 6.

Die politischen Parteien sind Ausdruck des politischen Pluralismus, wirken bei der Willensbildung des Volkes und deren Äußerung mit und sind Hauptinstrument der politischen Beteiligung. Ihre Gründung und die Ausübung ihrer Tätigkeit sind im Rahmen der Achtung der Verfassung und des Gesetzes frei. Ihre innere Struktur und ihre Arbeitsweise müssen demokratisch sein.

## Artikel 7.

Die Gewerkschaften und Unternehmerverbände verteidigen und fördern die ihnen eigenen wirtschaftlichen und sozialen Interessen. Ihre Gründung und die Ausübung ihrer Tätigkeit sind im Rahmen der Achtung der Verfassung und des Gesetzes frei. Ihre innere Struktur und ihre Arbeitsweise müssen demokratisch sein.

## Artikel 8.

- (1) Den Streitkräften, bestehend aus Heer, Flotte und Luftwaffe, obliegt es, die Souveränität und Unabhängigkeit Spaniens zu gewährleisten und seine territoriale Integrität und verfassungsmäßige Ordnung zu verteidigen.
- (2) Ein Organgesetz (Verfassungsgesetz) regelt die Grundlagen der Militärorganisation im Rahmen der vorliegenden Verfassung.

## Artikel 9.

- (1) Die Bürger und die öffentlichen Gewalten sind an die Verfassung und die übrige Rechtsordnung gebunden.
- (2) Den öffentlichen Gewalten obliegt es, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass Freiheit und Gleichheit des Einzelnen und der Gruppe, in die er sich einfügt, real und wirksam sind, die Hindernisse zu beseitigen, die ihre volle Entfaltung unmöglich machen oder erschweren, und die Teilnahme aller Bürger am politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Leben zu erleichtern.

(3) Die Verfassung gewährleistet das Prinzip der Legalität, die normative Rangordnung, die Öffentlichkeit der Normen, die Nichtrückwirkung der Sanktionsnormen, die sich ungünstig oder restriktiv auf die Rechte des Einzelnen auswirken, die Rechtssicherheit, die Verantwortlichkeit und das Verbot der Willkür seitens der öffentlichen Gewalten.

## **TITEL I**

### Die Grundrechte und -pflichten

#### Artikel 10.

(1) Die Würde des Menschen, die ihm zustehenden unverletzlichen Menschenrechte, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Achtung des Gesetzes und der Rechte anderer sind Grundlage der politischen Ordnung und des sozialen Friedens.

(2) Die auf die in der Verfassung anerkannten Grundrechte und -freiheiten bezüglichen Normen werden in Übereinstimmung mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und den von Spanien ratifizierten internationalen Verträgen und Abkommen über die gleiche Materie ausgelegt.

## **KAPITEL I**

### Spanier und Ausländer

#### Artikel 11.

(1) Die spanische Staatsangehörigkeit wird gemäß den Bestimmungen des Gesetzes erworben, beibehalten und entzogen.

(2) Keinem gebürtigen Spanier darf die Staatsangehörigkeit entzogen werden.

(3) Der Staat kann mit den iberoamerikanischen Ländern oder solchen, die durch besondere Beziehungen mit Spanien verbunden waren oder sind, Verträge über doppelte Staatsangehörigkeit abschließen. In diesen selben Ländern können Spanier ohne den Verlust ihrer durch Geburt erworbenen Staatsbürgerschaft das Bürgerrecht erhalten, selbst wenn die betreffenden Länder ihren Bürgern kein Recht auf Gegenseitigkeit einräumen.

#### Artikel 12.

Die Spanier werden im Alter von 18 Jahren mündig.

#### Artikel 13.

(1) Ausländer genießen in Spanien nach Maßgabe der Verträge und Gesetze die öffentlichen Freiheiten, die dieser Titel gewährleistet.

(2) Nur Spanier sind der in Art. 23 anerkannten Rechte teilhaftig, mit Ausnahme dessen, was auf der Grundlage von Gegenseitigkeitskriterien für das aktive und passive Wahlrecht bei Gemeindewahlen vertrags- oder gesetzmäßig niedergelegt werden könnte.

(3) Einer Auslieferung wird nur in Erfüllung eines Vertrages oder eines Gesetzes und gemäß dem Gegenseitigkeitsprinzip stattgegeben. Die Auslieferung erstreckt sich nicht auf politische Delikte, wobei Terrorakte nicht als solche betrachtet werden.

(4) Das Gesetz legt die Bedingungen fest, nach denen Bürger anderer Länder und Staatenlose Asylrecht in Spanien genießen können.



## KAPITEL II Rechte und Freiheiten

### Artikel 14.

Die Spanier sind vor dem Gesetz gleich, und niemand darf wegen seiner Abstammung, seiner Rasse, seines Geschlechtes, seiner Religion, seiner Anschauungen oder jedweder anderer persönlicher oder sozialer Umstände diskriminiert werden.

### ABSCHNITT 1

#### Die Grundrechte und die öffentlichen Freiheiten

### Artikel 15.

Alle haben das Recht auf Leben und körperliche und moralische Unversehrtheit, und niemand darf jemals der Folterung oder unmenschlichen und entwürdigenden Strafen oder Behandlungen ausgesetzt werden. Die Todesstrafe ist abgeschafft, mit Ausnahme der Bestimmungen, die die militärischen Strafgesetze für Kriegszeiten festlegen können.

### Artikel 16.

(1) Die Freiheit des ideologischen Bekenntnisses, der Religion und des Kultes wird dem Einzelnen und den Gemeinschaften gewährleistet; sie wird in ihren Ausdrucksformen lediglich durch die vom Gesetz geschützte Notwendigkeit der Wahrung der öffentlichen Ordnung begrenzt.

(2) Niemand darf gezwungen werden, sich zu seiner Ideologie, seiner Religion oder seinem Glauben zu äußern.

(3) Es gibt keine staatliche Konfession. Die öffentlichen Gewalten berücksichtigen die religiösen Anschauungen der spanischen Gesellschaft und unterhalten die entsprechenden, auf Zusammenarbeit ausgerichteten Beziehungen zur katholischen Kirche und den übrigen Konfessionen.

### Artikel 17.

(1) Jeder hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Ein Freiheitsentzug darf nur unter Berücksichtigung der Bestimmungen dieses Artikels und nur nach Maßgabe der vom Gesetz bestimmten Fälle und Form stattfinden.

(2) Die vorläufige Festnahme darf die für die Ermittlungen, die zur Klärung des Sachverhaltes führen sollen, unbedingt notwendige Zeit nicht überschreiten; in jedem Fall muss der Festgenommene nach einer Höchstfrist von zweiundsiebzig Stunden freigelassen oder der Justizbehörde übergeben werden.

(3) Jede festgenommene Person muss unverzüglich und auf für sie verständliche Art und Weise über ihre Rechte und die Gründe ihrer Festnahme informiert werden. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen wird dem Festgenommenen die Unterstützung eines Anwalts bei den polizeilichen oder richterlichen Ermittlungen gewährleistet.

(4) Das Gesetz wird ein Habeas corpus-Verfahren vorsehen, nach dem jede illegal festgenommene Person unverzüglich dem Richter vorzuführen ist. Das Gesetz bestimmt ebenso die Höchstfrist der Dauer der Untersuchungshaft.

## Artikel 18.

- (1) Das Recht auf Ehre, auf die persönliche und familiäre Intimsphäre und auf das eigene Image wird gewährleistet.
- (2) Die Wohnung ist unverletzlich. Betretungen oder Durchsuchungen dürfen nicht ohne die Einwilligung des Inhabers oder ohne Gerichtsentscheidung vorgenommen werden, mit Ausnahme der Fälle, bei denen es sich um in flagranti festgestellte Delikte handelt.
- (3) Das Kommunikationsgeheimnis sowie insbesondere das Post- und Fernmeldegeheimnis werden außer im Falle einer Gerichtsentscheidung gewährleistet.
- (4) Das Gesetz beschränkt den Einsatz der Informatik zwecks Gewährleistung der Ehre sowie der persönlichen und familiären Intimsphäre der Bürger und der vollen Ausübung ihrer Rechte.

## Artikel 19.

Die Spanier haben das Recht auf freie Wahl des Wohnsitzes und auf Freizügigkeit im Hoheitsgebiet des Staates.

Ebenso haben sie das Recht, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen frei von und nach Spanien aus- oder einzureisen. Dieses Recht darf nicht aus politischen oder ideologischen Gründen eingeschränkt werden.

## Artikel 20.

- (1) Folgende Rechte werden anerkannt und geschützt:
  - a) das Recht auf freie Meinungsäußerung und Verbreitung von Gedanken und Meinungen in Wort, Schrift oder jedwedem anderen Medium;
  - b) das Recht auf literarische, künstlerische, wissenschaftliche und technische Produktion und Schöpfung;
  - c) das Recht auf Lehrfreiheit;
  - d) das Recht auf freie und wahre Berichterstattung sowie deren Empfang über jedwedes Verbreitungsmedium. Das Gesetz regelt das Recht auf die Gewissensklausel und das Berufsgeheimnis bei der Ausübung dieser Freiheiten.
- (2) Die Ausübung dieser Rechte darf durch keinerlei Vorzensur eingeschränkt werden.
- (3) Das Gesetz regelt die Organisation und die parlamentarische Kontrolle der vom Staate oder irgendeiner öffentlichen Einrichtung abhängigen sozialen Kommunikationsmedien und gewährleistet den sozial und politisch relevanten Gruppen den Zugang zu denselben unter Wahrung des Pluralismus der Gesellschaft und der verschiedenen Sprachen Spaniens.
- (4) Diese Freiheiten werden begrenzt durch die Achtung der in diesem Titel anerkannten Rechte, durch die Vorschriften der sie regelnden Gesetze und besonders durch das Recht auf die Ehre, die Intimsphäre, das eigene Image und den Schutz der Jugend und der Kindheit.
- (5) Die Beschlagnahme von Veröffentlichungen, Tonbandaufnahmen und anderen Informationsmedien darf nur kraft Gerichtsentscheidung vorgenommen werden.

## Artikel 21.

- (1) Das Recht auf friedliche Versammlung ohne Waffen wird anerkannt. Die Ausübung dieses Rechtes bedarf keiner vorherigen Genehmigung.
- (2) Von Versammlungen an öffentlichen Stätten und von Demonstrationen ist die zuständige Behörde zuvor in Kenntnis zu setzen. Diese darf selbige nur verbieten, falls berechtigter Anlass zur Annahme einer Störung der öffentlichen Ordnung mit Gefahr für Personen und Güter gegeben ist.

## Artikel 22.

- (1) Das Recht, Vereine zu bilden, wird anerkannt.
- (2) Vereinigungen, deren Zwecke oder Mittel als Delikte zu klassifizieren sind, werden als illegal betrachtet.
- (3) Vereinigungen, die im Rahmen dieses Artikels gegründet werden, müssen sich mit dem alleinigen Zweck der Veröffentlichung in ein entsprechendes Register eintragen.
- (4) Die Vereinigungen können nur kraft einer begründeten Gerichtsentscheidung aufgelöst oder in ihrer Tätigkeit unterbrochen werden.
- (5) Geheimverbände und paramilitärische Vereinigungen sind verboten.

## Artikel 23.

- (1) Die Bürger haben das Recht, an den öffentlichen Angelegenheiten direkt oder durch in periodischen, allgemeinen Wahlen frei gewählte Vertreter teilzunehmen.
- (2) Ebenso haben sie das Recht, unter gleichen Bedingungen und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Zugang zu öffentlichen Ämtern und Funktionen zu nehmen.

## Artikel 24.

- (1) Jede Person hat bei der Ausübung ihrer legitimen Rechte und Interessen Anspruch auf wirksamen Schutz durch Richter und Gerichte. In keinem Fall darf es zu Verteidigungslosigkeit kommen.
- (2) Ebenso hat jedermann das Recht auf einen vom Gesetz bestimmten ordentlichen Richter, auf die Verteidigung und Vertretung durch einen Rechtsanwalt, auf Information über die gegen ihn vorliegende Anklage, auf einen öffentlichen Prozess ohne unzulässige Verzögerungen und mit allen Garantien, auf den Einsatz der für seine Verteidigung angebrachten Beweismittel, auf die Weigerung, gegen sich selbst auszusagen und sich für schuldig zu erklären sowie auf die Vermutung der Unschuld.

Das Gesetz regelt die Fälle, in denen auf Grund der Verwandtschaft oder des Berufsgeheimnisses keine Verpflichtung zur Aussage über mutmaßliche Straftaten vorliegt.

## Artikel 25.

- (1) Niemand darf auf Grund von Taten oder Unterlassungen bestraft oder verurteilt werden, die zum Zeitpunkt ihrer Ausführung und gemäß der geltenden Gesetzgebung kein Delikt und keine Übertretung oder Verletzung von Verwaltungsbestimmungen darstellen.
- (2) Die Strafen, die in Freiheitsentzug bestehen, sowie die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen müssen auf Umerziehung und soziale Wiedereingliederung ausgerichtet sein und dürfen nicht in Zwangsarbeit bestehen. Jeder zu einer Gefängnisstrafe Verurteilte, der diese verbüßt, genießt die in diesem KAPITEL vorgesehenen Grundrechte, mit Ausnahme derer, die ausdrücklich durch den Inhalt des Urteils, durch den Sinn der Strafe und die Strafanstaltsgesetze beschränkt werden. In jedem Fall hat er das Recht auf bezahlte Arbeit und auf die entsprechenden Leistungen der sozialen Sicherheit sowie auf den Zugang zur Kultur und auf die Gesamtentwicklung seiner Persönlichkeit.
- (3) Die Zivilverwaltung darf weder direkt noch subsidiär Sanktionen auferlegen, die in Freiheitsentzug bestehen.

## Artikel 26.

Ehrengerichte sind im Bereich der Zivilverwaltung und der Berufsverbände unzulässig.

## Artikel 27.

- (1) Alle haben das Recht auf Erziehung. Die Freiheit des Unterrichts wird anerkannt.
- (2) Ziel der Erziehung ist die freie Entfaltung der Persönlichkeit des Menschen unter Achtung der demokratischen Prinzipien des Zusammenlebens und der Grundrechte und -freiheiten.
- (3) Die öffentlichen Gewalten gewährleisten den Eltern das Recht auf die religiöse und moralische Erziehung ihrer Kinder, die mit ihren eigenen Überzeugungen übereinstimmt.
- (4) Die Grundschulausbildung ist obligatorisch und unentgeltlich.
- (5) Die öffentlichen Gewalten gewährleisten das Recht aller auf Erziehung mittels einer allgemeinen Lehrplanung, an der alle betroffenen Bereiche teilnehmen, sowie mittels der Errichtung von Lehranstalten.
- (6) Natürlichen und juristischen Personen wird die Freiheit anerkannt, unter Wahrung der Verfassungsgrundsätze Lehranstalten zu gründen.
- (7) Die Lehrer, Eltern und gegebenenfalls die Schüler beteiligen sich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen an der Kontrolle und Leitung aller mit öffentlichen Mitteln unterhaltenen staatlichen Lehranstalten.
- (8) Die öffentlichen Gewalten führen die Kontrolle und Ausgestaltung des Schulwesens durch, um die Erfüllung der Gesetze zu gewährleisten.
- (9) Die öffentlichen Gewalten unterstützen die Lehranstalten, welche die vom Gesetz festgelegten Bedingungen erfüllen.
- (10) Die Selbstverwaltung der Universitäten gemäß den Bestimmungen des Gesetzes wird anerkannt.

## Artikel 28.

- (1) Alle haben das Recht, sich frei einer Gewerkschaft anzuschließen. Die Ausübung dieses Rechtes durch die Streitkräfte oder militärischen Institutionen oder die übrigen der Militärdisziplin unterstehenden Einheiten kann durch Gesetz Einschränkungen oder Ausnahmen unterworfen werden. Das Gesetz regelt ebenso die Sonderbestimmungen zur Ausübung dieses Rechtes durch Angehörige des Öffentlichen Dienstes. Die Gewerkschaftsfreiheit schließt das Recht auf Gründung von Gewerkschaften und auf freien Anschluss an dieselben ein, sowie das Recht der Gewerkschaften, Konföderationen zu bilden und internationale Gewerkschaftsorganisationen zu gründen oder sich solchen anzuschließen. Niemand darf zum Eintritt in eine Gewerkschaft gezwungen werden.
- (2) Das Recht der Arbeitnehmer auf Streik zur Verteidigung ihrer Interessen wird anerkannt. Das Gesetz zur Regelung der Ausübung dieses Rechtes wird die erforderlichen Garantien zur Sicherung der für die Gemeinschaft wesentlichen Dienste vorsehen.

## Artikel 29.

- (1) Alle Spanier haben das Recht, Petitionen schriftlich in der Form und mit der Wirkung, die das Gesetz vorsieht, individuell oder kollektiv vorzubringen.
- (2) Die Mitglieder der Streitkräfte, der Militärinstitute oder anderer der Militärdisziplin unterworfenen Einheiten dürfen dieses Recht nur individuell und gemäß ihren Sondergesetzen ausüben.

## ABSCHNITT 2

## Die Bürgerrechte und -pflichten

## Artikel 30.

- (1) Die Spanier haben das Recht und die Pflicht, Spanien zu verteidigen.
- (2) Das Gesetz wird die militärischen Pflichten der Spanier festsetzen und unter Wahrung der entsprechenden Garantien die Militärdienstverweigerung aus Gewissensgründen sowie alle anderen Ursachen der Wehrpflichtbefreiung regeln. Das Gesetz kann gegebenenfalls einen sozialen Ersatzdienst auferlegen.
- (3) Zur Erfüllung von Zielen, die im Interesse der Allgemeinheit liegen, kann ein Zivildienst eingerichtet werden.
- (4) Durch Gesetz können die Pflichten der Bürger bei schweren Risiken, Katastrophen oder öffentlichen Unglücksfällen geregelt werden.

## Artikel 31.

- (1) Alle tragen gemäß ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten mittels eines gerechten und auf den Prinzipien der Gleichheit und Progression beruhenden Steuersystems, das in keinem Fall bis zur Beschlagnahme führen darf, zur Bestreitung der öffentlichen Lasten bei.
- (2) Die Staatsausgabe nimmt nach dem Grundsatz der Billigkeit eine Verteilung der öffentlichen Mittel vor, und ihre Planung und Ausführungen entsprechen den Kriterien der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit.
- (3) Persönliche oder Vermögensleistungen öffentlichen Charakters dürfen nur auf Grund eines Gesetzes festgelegt werden.

## Artikel 32.

- (1) Mann und Frau haben das Recht, in voller Gleichberechtigung die Eheschließung zu begehren.
- (2) Das Gesetz wird die Formen der Ehe, das Alter und die Fähigkeit zur Eheschließung, die Rechte und Pflichten der Ehegatten, die Ursachen der Trennung und Auflösung und deren Wirkungen regeln.

## Artikel 33.

- (1) Das Recht auf Privateigentum und das Erbrecht werden anerkannt.
- (2) Die soziale Funktion dieser Rechte grenzt ihren Inhalt nach Maßgabe der Gesetze ab.
- (3) Niemand darf seiner Güter und seiner Rechte enteignet werden, es sei denn aus gerechtfertigten Gründen des öffentlichen Nutzens oder des Interesses der Allgemeinheit sowie gegen entsprechende Entschädigung und nach Maßgabe der Gesetze.

## Artikel 34.

- (1) Das Stiftungsrecht für im Interesse der Allgemeinheit liegende Zwecke und gemäß dem Gesetz wird anerkannt.
- (2) Ebenso sind für Stiftungen die in Artikel 22, Abs. 2 und 4 festgelegten Bestimmungen gültig.

## Artikel 35.

- (1) Alle Spanier haben die Pflicht zu arbeiten und das Recht auf Arbeit, auf die freie Wahl des Berufes oder Gewerbes, auf sozialen Aufstieg mittels der Arbeit und auf ausreichende

Vergütung zur Deckung ihrer Bedürfnisse und derjenigen ihrer Familie. In keinem Fall darf es zu einer Diskriminierung auf Grund des Geschlechts kommen.

(2) Das Gesetz wird ein Arbeitnehmerstatut vorsehen.

Artikel 36.

Das Gesetz wird die Besonderheiten der Rechtsordnung der Berufskammern und die Ausübung der mit Titel versehenen Berufe regeln. Die interne Struktur und Arbeitsweise der Kammern müssen demokratisch sein.

Artikel 37.

(1) Das Gesetz gewährleistet das Recht auf kollektive Verhandlung zwischen den Vertretern der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber sowie die Verbindlichkeit der getroffenen Abkommen.

(2) Das Recht der Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf kollektive Arbeitskonfliktmaßnahmen wird anerkannt. Das Gesetz zur Regelung der Ausübung dieses Rechtes wird ungeachtet eventueller Beschränkungen die erforderlichen Garantien zur Sicherung der für die Gemeinschaft wesentlichen Dienste vorsehen.

Artikel 38.

Die Freiheit des Unternehmens im Rahmen der Marktwirtschaft wird anerkannt. Die öffentlichen Gewalten gewährleisten und schützen die Ausübung dieser Freiheit und die Verteidigung der Produktivität gemäß den Erfordernissen der allgemeinen Wirtschaft und gegebenenfalls der Planung.

### KAPITEL III

#### Die Leitprinzipien der Sozial- und Wirtschaftspolitik

Artikel 39.

(1) Die öffentlichen Gewalten sichern der Familie einen sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Schutz zu.

(2) Die öffentlichen Gewalten sichern ebenso den vollen Schutz der Kinder, die ungeachtet ihrer Abstammung vor dem Gesetz gleich sind, und den der Mütter ohne Berücksichtigung ihres Zivilstandes zu. Das Gesetz wird die Nachprüfung der Vaterschaft ermöglichen.

(3) Die Eltern müssen sowohl ihren ehelichen als auch ihren außerehelichen Kindern bis zu deren Volljährigkeit und in allen weiteren gesetzmäßig begründeten Fällen jede Art von Beistand gewähren.

(4) Die Kinder genießen den in den internationalen Abkommen, welche die Wahrung ihrer Rechte zum Ziel haben, vorgesehenen Schutz.

Artikel 40.

(1) Die öffentlichen Gewalten sorgen im Rahmen einer wirtschaftlichen Stabilitätspolitik für die für den sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt günstigen Voraussetzungen und eine gerechtere Verteilung des regionalen und persönlichen Einkommens. Ganz besonders führen sie eine auf die Vollbeschäftigung ausgerichtete Politik durch.

(2) Die öffentlichen Gewalten fördern gleichfalls eine auf die Gewährleistung der Berufsausbildung und -umschulung zielende Politik; sie sorgen für Arbeitssicherheit und

-hygiene und garantieren die notwendige Ruhezeit durch Arbeitszeitbegrenzung sowie regelmäßigen bezahlten Urlaub und die Förderung entsprechender Erholungsstätten.

#### Artikel 41.

Die öffentlichen Gewalten unterhalten ein System der Sozialversicherung für alle Bürger, das im Bedarfsfalle ausreichenden Beistand und soziale Leistungen gewährleistet, insbesondere im Falle der Arbeitslosigkeit. Zusätzliche Leistungen sind frei.

#### Artikel 42.

Der Staat überwacht besonders die Wahrung der wirtschaftlichen und sozialen Rechte der spanischen Arbeitnehmer im Ausland und richtet seine Politik auf deren Rückführung aus.

#### Artikel 43.

(1) Das Recht auf den Schutz der Gesundheit wird anerkannt.

(2) Es obliegt den öffentlichen Gewalten, die Gesundheitsfürsorge mittels Präventivmaßnahmen und der erforderlichen Leistungen und Dienste zu organisieren und zu (3) Die öffentlichen Gewalten fördern die sanitäre Erziehung, die Leibeserziehung und den Sport sowie eine angebrachte Nutzung der Freizeit.

#### Artikel 44.

(1) Die öffentlichen Gewalten fördern und unterstützen den Zugang zur Kultur, auf den jedermann ein Recht hat.

(2) Die öffentlichen Gewalten fördern die Wissenschaften sowie die wissenschaftliche und technische Forschung im Interesse der Allgemeinheit.

#### Artikel 45.

(1) Alle haben das Recht, eine der Entwicklung der Person förderliche Umwelt zu genießen sowie die Pflicht, sie zu erhalten.

(2) Die öffentlichen Gewalten überwachen die rationelle Nutzung aller natürlichen Hilfsquellen mit dem Ziel, die Lebensqualität zu schützen und zu verbessern und die Umwelt zu verteidigen und wiederherzustellen. Dafür ist die Solidarität der Volksgemeinschaft unerlässliche Grundlage.

(3) Das Gesetz sieht gegenüber denen, die gegen die Bestimmungen von Absatz 2 verstoßen, Strafsanktionen oder gegebenenfalls von der Verwaltung auferlegte Sanktionen sowie die Pflicht zur Wiedergutmachung entstandenen Schadens vor.

#### Artikel 46.

Die öffentlichen Gewalten gewährleisten die Pflege und fördern die Bereicherung des historischen, kulturellen und künstlerischen Erbes der Völker Spaniens und der darin enthaltenen Güter ungeachtet ihres Rechtsstatus und ihrer Trägerschaft. Das Strafgesetz verfolgt jeden Verstoß gegen dieses Kulturgut.

#### Artikel 47.

Alle Spanier haben das Recht auf eine würdige und angemessene Wohnung. Die öffentlichen Gewalten fördern die notwendigen Voraussetzungen und setzen die entsprechenden Vorschriften für die Ausübung dieses Rechtes fest. Sie regeln die Bodennutzung im Interesse

der Allgemeinheit und zur Verhinderung der Spekulation. Die Gemeinschaft ist am Mehrwert beteiligt, den die Städtebautätigkeit der öffentlichen Einrichtungen erzeugt.

Artikel 48.

Die öffentlichen Gewalten fördern die Voraussetzungen für eine freie und wirksame Teilnahme der Jugend am politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben.

Artikel 49.

Die öffentlichen Gewalten setzen sich für die Fürsorge, Behandlung, Rehabilitierung und Integrierung der körperlich und geistig Geschädigten ein. Sie gewähren ihnen die benötigte Sonderbehandlung und schützen sie besonders bei Inanspruchnahme der Rechte, die dieser Titel allen Bürgern gewährt.

Artikel 50.

Die öffentlichen Gewalten gewährleisten den Bürgern im vorgerückten Alter mittels angemessener und in regelmäßigem Abstand angepasster Renten ein wirtschaftlich gesichertes Auskommen. Außerdem werden sie mittels eines Systems sozialer Leistungen, die sich auf ihre spezifischen Probleme auf den Gebieten der Gesundheit, Wohnung, Kultur und Muße richten, ungeachtet der familiären Verpflichtungen ihr Wohl fördern.

Artikel 51.

(1) Die öffentlichen Gewalten gewährleisten den Schutz der Verbraucher und Benutzer durch den Einsatz wirksamer Maßnahmen auf den Gebieten der Sicherheit, der Gesundheit und der Verteidigung der legitimen wirtschaftlichen Interessen derselben.

(2) Die öffentlichen Gewalten fördern die Information und Erziehung der Verbraucher und Benutzer sowie ihre Organisationen; letztere werden in allen Fragen, die sie betreffen, nach

(3) Das Gesetz regelt im Rahmen der Bestimmungen von Absatz 1 und 2 den Binnenhandel und das System der Genehmigung von Handelsprodukten.

Artikel 52.

Das Gesetz regelt die Berufsverbände, die sich für die Verteidigung der ihnen eigenen wirtschaftlichen Interessen einsetzen. Ihre innere Struktur und ihre Arbeitsweise müssen demokratisch sein.

#### KAPITEL IV

#### Die Garantien der Grundfreiheiten und -rechte

Artikel 53.

(1) Die im zweiten KAPITEL dieses Titels anerkannten Rechte und Freiheiten sind für alle öffentlichen Gewalten bindend. Nur durch Gesetz, das in jedem Fall ihr Grundgehalt achten muss, kann die Ausübung dieser Rechte und Freiheiten geregelt werden, die gemäß den Bestimmungen von Art. 161 Abs. 1a) geschützt sind.

(2) Jeder Bürger kann mittels eines auf dem Vorzugs- und Schnelligkeitsprinzip beruhenden Verfahrens vor den ordentlichen Gerichten und gegebenenfalls mittels einer Verfassungsbeschwerde (recurso de amparo) vor dem Verfassungsgericht um den Schutz der in Art. 14 und dem ersten Teil des zweiten KAPITELS anerkannten Freiheiten und Rechte ersuchen.



Letztere Beschwerde ist auf die in Art. 30 anerkannte Wehrpflichtverweigerung aus Gewissensgründen anwendbar.

(3) Die Anerkennung und Achtung sowie der Schutz der in Kapitel III anerkannten Prinzipien liegen der positiven Gesetzgebung, der Rechtspraxis und dem Verhalten der öffentlichen Gewalten zugrunde. Sie können vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit nur nach Maßgabe der diesbezüglichen Gesetze geltend gemacht werden.

#### Artikel 54.

Durch ein Organgesetz wird die Einrichtung des Volksverteidigers (Defensor del pueblo) geregelt, der als hoher Beauftragter der Cortes Generales von diesen zur Verteidigung der in diesem Titel enthaltenen Rechte ernannt wird, und der zu diesem Zweck die Tätigkeit der Verwaltung überwachen kann und den Cortes Generales darüber Bericht zu erstatten hat.

### KAPITEL V

#### Die Aufhebung der Rechte und Freiheiten

#### Artikel 55.

(1) Die in Art. 17, 18 Abs. 2 und 3, Art. 19, 20 Abs. 1 a) und d), und 5, Art. 21, 28 Abs. 2 und Art. 37 Abs. 2 anerkannten Rechte können aufgehoben werden, wenn die Erklärung des Ausnahme- oder Belagerungszustandes gemäß der in der Verfassung vorgesehenen Verfahrensweise beschlossen wird. Art. 17 Abs. 3 wird von dieser Bestimmung für den Fall der Erklärung des Ausnahmezustandes ausgenommen.

(2) Ein Organgesetz kann die Art und Weise und die Fälle festlegen, in denen es für bestimmte Personen im Zusammenhang mit Nachforschungen bezüglich der Aktivitäten bewaffneter Gruppen oder Teroelementen individuell und unter der erforderlichen gerichtlichen Intervention sowie der angebrachten parlamentarischen Kontrolle zu einer Aufhebung der in Art. 17 Abs. 2 und 18 Abs. 2 und 3 anerkannten Rechte kommt.

Die ungerechtfertigte oder missbräuchliche Ausübung der kraft dieses Organgesetzes zugestandenen Befugnisse führt als Verletzung der von den Gesetzen anerkannten Rechte und Freiheiten zu strafrechtlicher Haftung.

### TITEL II

#### Die Krone

#### Artikel 56.

(1) Der König ist Oberhaupt des Staates, Symbol seiner Einheit und Beständigkeit. Er überwacht und lenkt als Schiedsrichter den regelmäßigen Gang der Institutionen, übernimmt die höchste Vertretung des spanischen Staates auf dem Gebiet der internationalen Beziehungen, besonders mit den Nationen, die mit Spanien eine historische Gemeinschaft bilden, und übt die Funktionen aus, die ihm die Verfassung und die Gesetze ausdrücklich zuschreiben.

(2) Er trägt den Titel König von Spanien und kann die übrigen der Krone zustehenden Titel benutzen.

(3) Die Person des Königs ist unverletzlich und an keine Verantwortung gebunden. Die Akte des Königs werden stets in der in Art. 64 vorgesehenen Form gegengezeichnet und

sind ohne diese Gegenzeichnung ungültig, mit Ausnahme der in Art. 65 Abs. 2 enthaltenen Bestimmung.

#### Artikel 57.

(1) Die Krone Spaniens wird an die Nachfolger Seiner Majestät Juan Carlos I de Borbón, legitimer Erbe der historischen Dynastie, vererbt. Die Thronfolge richtet sich nach der gewöhnlichen Ordnung der Erstgeburt und Vertretung; hierbei ist die frühere der späteren Linie vorzuziehen, innerhalb derselben Linie der nähere dem ferneren Grad, innerhalb desselben Grades der männliche dem weiblichen Thronfolger und innerhalb desselben Geschlechtes die ältere der jüngeren Person.

(2) Der Kronprinz führt von seiner Geburt oder von dem Zeitpunkt an, in dem die Gegebenheiten seine Berufung veranlassen, den Titel Prinz von Asturien sowie alle weiteren Titel, die traditionsgemäß dem Anwärter auf den Thron von Spanien zustehen.

(3) Im Falle des Erlöschens aller zu Recht erkannten Linien sehen die Cortes Generales die Art der Thronfolge vor, die die Interessen Spaniens am besten wahrt.

(4) Die Personen, welche Anrecht auf die Thronfolge haben und gegen das ausdrückliche Verbot des Königs und der Cortes Generales eine Ehe schließen, werden von der Anwartschaft auf die Krone ausgeschlossen. Dies gilt für sie selbst und für ihre Nachfolger.

(5) Abdankungen, Verzichte und jede Art von Zweifeln, die de facto oder de jure innerhalb der Anwartschaft auf die Krone auftreten können, werden durch ein Organgesetz entschieden.

#### Artikel 58.

Die Gemahlin des Königs oder der Prinzgemahl dürfen keine verfassungsmäßigen Aufgaben wahrnehmen, mit Ausnahme der für die Regentschaft vorgesehenen Bestimmungen.

#### Artikel 59.

(1) Im Falle der Minderjährigkeit des Königs übernehmen gemäß der in der Verfassung vorgesehenen Ordnung unverzüglich der Vater oder die Mutter des Königs oder, im Ermangelung dieser Personen, der in der Thronfolge nächststehende volljährige Verwandte die Regentschaft und üben sie während der Minderjährigkeitsdauer des Königs aus.

(2) Im Falle der Untauglichkeit des Königs für die Ausübung seines Amtes und der Anerkennung dieses Unvermögens durch die Cortes Generales übernimmt der Kronprinz unverzüglich die Regentschaft, sofern er volljährig ist. Wenn er es nicht ist, wird auf die in Absatz 1 vorgesehene Art und Weise verfahren, bis der Kronprinz die Volljährigkeit erreicht hat.

(3) Falls es keine Person gibt, der die Regentschaft zusteht, wird diese von den Cortes Generales ernannt; diese Regentschaft kann aus einer, drei oder fünf Personen bestehen.

(4) Für die Ausübung der Regentschaft ist es erforderlich, Spanier und volljährig zu sein.

(5) Die Regentschaft wird auf Grund eines Verfassungsmandats und stets im Namen des Königs ausgeübt.

#### Artikel 60.

(1) Vormund des minderjährigen Königs ist die Person, die der verstorbene König in seinem Testament ernannt hat, vorausgesetzt, dass dieser Vormund volljährig und von Geburt Spanier ist. Im Falle der Nichternennung übernehmen der Vater oder die Mutter die Vormundschaft, solange sie im Witwenstand verbleiben. In Ermangelung derselben ernennen die Cortes Generales den Vormund; jedoch können nur der Vater, die Mutter oder die direkten

Vorfahren des Königs gleichzeitig das Amt des Regenten und des Vormundes einnehmen.  
(2) Die Ausübung der Vormundschaft ist ebenfalls unvereinbar mit jedem politischen Amt oder jeder politischen Vertretung.

#### Artikel 61.

(1) Der König schwört bei seiner Proklamation vor den Cortes Generales den Eid auf die getreue Ausübung seines Amtes, auf die Einhaltung sowie den Einsatz für die Wahrung der Verfassung und der Gesetze und auf die Achtung der Rechte der Bürger und der Autonomen Gemeinschaften.

(2) Der Kronprinz schwört bei Erreichen der Volljährigkeit und der Regent oder die Regenten schwören bei Übernahme ihres Amtes denselben Eid sowie den der Treue gegenüber dem König.

#### Artikel 62.

Dem König obliegt es,

- a) die Gesetze zu billigen und zu erlassen;
- b) die Cortes Generales einzuberufen und aufzulösen und gemäß den von der Verfassung vorgesehenen Bestimmungen Wahlen anzusetzen;
- c) eine Volksabstimmung in den von der Verfassung vorgesehenen Fällen einzuberufen;
- d) den Kandidaten für das Amt des Regierungspräsidenten vorzuschlagen und ihn gegebenenfalls zu ernennen sowie ihn nach Maßgabe der Verfassung des Amtes zu entheben;
- e) die Mitglieder der Regierung auf Vorschlag des Präsidenten zu ernennen und zu entlassen;
- f) die im Ministerrat beschlossenen Dekrete zu erlassen, die zivilen und militärischen Ämter zu erteilen sowie in Übereinstimmung mit den Gesetzen Ehrenbeweise und Auszeichnungen zu verleihen;
- g) über die Staatsangelegenheiten informiert zu sein und zu diesem Zweck auf Antrag des Regierungspräsidenten, und wenn es ihm angebracht erscheint, die Sitzungen des Ministerrates zu präsidieren;
- h) die oberste Befehlsgewalt über die Streitkräfte auszuüben;
- i) von dem Begnadigungsrecht gemäß dem Gesetz Gebrauch zu machen; letzteres kann keine allgemeinen Gnadenerlasse genehmigen.
- j) die Schirmherrschaft über die Königlichen Akademien zu übernehmen.

#### Artikel 63.

(1) Der König akkreditiert die Botschafter und anderen diplomatischen Vertreter. Die ausländischen Vertreter in Spanien sind vor ihm akkreditiert.

(2) Dem König obliegt es gemäß der Verfassung und den Gesetzen die Zustimmung des Staates zu internationalen Verpflichtungen mittels Verträgen zum Ausdruck zu bringen.

(3) Dem König obliegt es nach Einholung der Genehmigung der Cortes Generales, den Krieg zu erklären und Frieden zu schließen.

#### Artikel 64.

(1) Die Akte des Königs werden vom Regierungspräsidenten und gegebenenfalls von den zuständigen Ministern gegengezeichnet. Der Vorschlag und die Ernennung des Regierungspräsidenten sowie die in Artikel 99 vorgesehene Auflösung werden vom Präsidenten des Kongresses gegengezeichnet.

(2) Die Verantwortung für die Akte des Königs liegt bei den gegenzeichnenden Personen.

Artikel 65.

(1) Der König erhält aus dem Staatshaushalt eine Pauschalsumme für den Unterhalt seiner Familie und den des Königshauses. Er verfügt frei über diese Summe.

(2) Der König ernennt und entlässt frei die zivilen und militärischen Mitglieder seines Hauses.

### **TITEL III**

Die Cortes Generales

#### **KAPITEL I**

Die Kammern

Artikel 66.

(1) Die Cortes Generales vertreten das spanische Volk und setzen sich aus dem Kongress der Abgeordneten und dem Senat zusammen.

(2) Die Cortes Generales üben die gesetzgebende Gewalt des Staates aus, bewilligen den Staatshaushalt, kontrollieren die Regierungstätigkeit und haben alle weiteren Zuständigkeiten inne, die ihnen die Verfassung zuweist.

(3) Die Cortes Generales sind unverletzlich.

Artikel 67.

(1) Niemand kann gleichzeitig Mitglied beider Kammern sein oder den Sitz in einer Abgeordnetenversammlung einer Autonomen Gemeinschaft mit dem des Abgeordneten im Kongress verbinden.

(2) Die Mitglieder der Cortes Generales sind nicht durch ein Zwangsmandat gebunden.

(3) Versammlungen von Parlamentariern, die ohne ordentliche Einberufung abgehalten werden, sind für die Kammern nicht bindend und können weder deren Funktionen erfüllen noch ihre Privilegien genießen.

Artikel 68.

(1) Der Kongress besteht aus mindestens 300 und höchstens 400 Abgeordneten, die in allgemeiner, freier, gleicher, direkter und geheimer Wahl gemäß dem Gesetz gewählt werden.

(2) Wahlkreis ist die Provinz. Die Bevölkerungen von Ceuta und Melilla sind durch je einen Abgeordneten vertreten. Die Verteilung der Gesamtzahl der Abgeordneten erfolgt gemäß Gesetz; jedem Wahlkreis steht eine ursprüngliche Mindestvertretung zu, und die Aufteilung der übrigen Abgeordneten erfolgt im Verhältnis zur Bevölkerungszahl.

(3) Die Wahl wird in jedem Wahlkreis unter Beachtung von Verhältniswahlkriterien durchgeführt.

(4) Der Kongress wird auf vier Jahre gewählt. Das Abgeordnetenmandat läuft vier Jahre nach der Wahl oder am Tage der Auflösung der Kammer ab.

(5) Wahlberechtigt und wählbar sind alle Spanier, die im Vollbesitz ihrer politischen Rechte sind. Die Ausübung des Wahrechtes seitens der Spanier, die sich außerhalb des Staatsgebietes Spaniens befinden, wird vom Gesetz anerkannt und vom Staat ermöglicht.

(6) Die Wahlen finden zwischen dreißig und sechzig Tagen nach Beendigung des Mandates statt. Der neugewählte Kongress muss innerhalb von 25 Tagen nach Abhaltung der Wahlen zu seiner ersten Sitzung einberufen werden.

#### Artikel 69.

(1) Der Senat ist die Kammer, welche die territoriale Vertretung innehat.

(2) In jeder Provinz wählen die Stimmberechtigten in allgemeiner, freier, gleicher, direkter und geheimer Wahl gemäß einem Organgesetz jeweils vier Senatoren.

(3) In den Inselprovinzen bildet jede Insel oder Inselgruppe, die über einen Cabildo Insular oder einen Inselrat verfügt, einen Wahlkreis zum Zwecke der Senatorenwahl; den großen Inseln, Gran Canaria, Mallorca und Tenerife, stehen je drei Senatoren und folgenden Inseln oder Inselgruppen jeweils einer zu: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote und La Palma.

(4) Die Bevölkerungen von Ceuta und Melilla wählen je zwei Senatoren.

(5) Die Autonomen Gemeinschaften ernennen außerdem einen Senator sowie einen weiteren pro Million Einwohner ihres entsprechenden Gebietes. Die Ernennung obliegt der gesetzgebenden Versammlung oder, in Ermangelung derselben, dem obersten Kollegialorgan der Autonomen Gemeinschaft, und zwar gemäß den Statuten, die in jedem Fall die angemessene Verhältniswahl gewährleisten.

(6) Der Senat wird auf vier Jahre gewählt. Das Mandat der Senatoren läuft vier Jahre nach ihrer Wahl oder am Tag der Auflösung der Kammer ab.

#### Artikel 70.

(1) Das Wahlgesetz legt die Gründe für die Unwählbarkeit und Unvereinbarkeit von Abgeordneten und Senatoren nieder, die in jedem Fall die folgenden Personen betreffen:

a) die Mitglieder des Verfassungsgerichtes;

b) die hohen Beamten der Staatsverwaltung, gemäß dem Gesetz und mit Ausnahme der Regierungsmitglieder;

c) den Volksverteidiger;

d) die aktiv tätigen Richter und Staatsanwälte;

e) die aktiv tätigen Berufsmilitärangehörigen und Mitglieder der Sicherheitskräfte und -einheiten und der Polizei;

f) die Mitglieder der Wahlausschüsse.

(2) Die Gültigkeit der Vollmachts- und Ernennungsurkunden der Mitglieder beider Kammern unterliegt gemäß den Bestimmungen des Wahlgesetzes der richterlichen Kontrolle.

#### Artikel 71.

(1) Die Abgeordneten und Senatoren genießen Unverletzlichkeit bezüglich der während ihrer Amtsperiode geäußerten Meinungen.

(2) Ebenso genießen die Abgeordneten und Senatoren während ihrer Mandatszeit Immunität und dürfen nur bei Begehung eines in flagranti festgestellten Vergehens festgenommen werden. Sie dürfen nur mit vorheriger Genehmigung der entsprechenden Kammer beschuldigt oder gerichtlich verfolgt werden.

(3) Strafverfahren gegen Abgeordnete und Senatoren fallen unter die Zuständigkeit der Strafkammer des Obersten Gerichtshofes.

(4) Die Abgeordneten und Senatoren erhalten eine Zuwendung, die von den entsprechenden Kammern festgesetzt wird.

#### Artikel 72.

(1) Die Kammern setzen ihre eigene Geschäftsordnung fest, verabschieden autonom ihren Haushaltsplan und regeln in gemeinsamem Einvernehmen die Personalordnung der Cortes Generales. Die Geschäftsordnungen sowie ihre Änderung werden in ihrer Gesamtheit einer abschließenden Wahl unterzogen, bei welcher die absolute Mehrheit erforderlich ist.

(2) Die Kammern wählen ihren jeweiligen Präsidenten und die weiteren Mitglieder ihrer Präsidien. Bei gemeinsamen Sitzungen führt der Präsident des Kongresses den Vorsitz; diese Sitzungen verlaufen gemäß einer mit absoluter Mehrheit jeder der Kammern gebilligten Geschäftsordnung der Cortes Generales.

(3) Die Präsidenten der Kammern üben im Namen derselben das Hausrecht und die Polizeigewalt in ihren jeweiligen Gebäuden aus.

#### Artikel 73.

(1) Die Kammern halten jährlich zwei ordentliche Sitzungsperioden ab: die erste von September bis Dezember und die zweite von Februar bis Juni.

(2) Die Kammern können auf Verlangen der Regierung, des Ständigen Ausschusses oder der absoluten Mehrheit der Mitglieder jedweder Kammer außerordentliche Sitzungsperioden abhalten. Diese außerordentlichen Sitzungsperioden müssen auf Grund einer bestimmten Tagesordnung einberufen werden, nach deren Behandlung sie für beendet erklärt werden.

#### Artikel 74.

(1) Die Kammern halten für die Wahrnehmung der nicht gesetzgebenden Kompetenzen, die Titel II den Cortes Generales ausdrücklich zuschreibt, gemeinsame Sitzungen ab.

(2) Die in Artikel 94 Abs. 1, 145 Abs. 2 und 158 Abs. 2 vorgesehenen Beschlüsse der Cortes Generales werden mit der Mehrheit jeder der Kammern gefasst. Im ersten Fall leitet der Kongress und in den beiden anderen der Senat das Verfahren ein. In beiden Fällen wird bei fehlender Übereinstimmung zwischen Senat und Kongress versucht, diese mittels eines aus der gleichen Anzahl von Abgeordneten und Senatoren zusammengesetzten Ausschusses zu erzielen. Der Ausschuss legt einen Text vor, über den beide Kammern abstimmen. Wenn er in der aufgesetzten Form nicht gebilligt wird, so entscheidet der Kongress mit absoluter Mehrheit.

#### Artikel 75.

(1) Die Kammern üben ihr Amt im Plenum und in den Ausschüssen aus.

(2) Die Kammern können die Annahme von Gesetzesentwürfen oder Gesetzesvorlagen den ständigen gesetzgebenden Ausschüssen übertragen. Das Plenum kann jedoch jederzeit eine Debatte und Abstimmung über einen Entwurf oder einen Antrag fordern, die Gegenstand dieser Übertragung gewesen sind.

(3) Ausgenommen von den in Abschnitt 2 vorgesehenen Bestimmungen sind die Verfassungsänderungen, internationale Fragen, Organ- und Rahmengesetze sowie der Staatshaushalt.

## Artikel 76.

(1) Der Kongress und der Senat und gegebenenfalls beide Kammern gemeinsam können Untersuchungsausschüsse über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse einsetzen. Die Ergebnisse sind für die Gerichte nicht bindend und haben keinen Einfluss auf richterliche Beschlüsse, ungeachtet der Mitteilung der Untersuchungsergebnisse an die Staatsanwaltschaft zwecks Einleitung entsprechender Schritte, falls diese begründet sind.

(2) Es ist Pflicht, auf Ersuchen der Kammern zu erscheinen. Das Gesetz regelt die Sanktionen, die wegen Nichterfüllung dieser Pflicht auferlegt werden können.

## Artikel 77.

(1) Die Kammern können individuelle und Kollektivpetitionen, die stets schriftlich vorzubringen sind, entgegennehmen; die direkte Eingabe mittels Bürgerkundgebung ist unzulässig.

(2) Die Kammern können die eingehenden Petitionen an die Regierung weiterleiten. Die Regierung ist verpflichtet, jederzeit eine Erklärung über ihren Inhalt abzugeben, wenn die Kammern dies verlangen.

## Artikel 78.

(1) Jede Kammer verfügt über einen Ständigen Ausschuss (Diputación Permanente), der sich mindestens aus einundzwanzig Mitgliedern zusammensetzt, welche die Fraktionen im Verhältnis zu deren Mitgliederzahl vertreten.

(2) Jedem Ständigen Ausschuss steht der Präsident der entsprechenden Kammer vor. Die Aufgaben des jeweiligen Ständigen Ausschusses sind die in Artikel 73 enthaltenen sowie diejenigen der Übernahme der gemäß Artikel 86 und 116 den Kammern zustehenden Befugnisse für den Fall ihrer Auflösung oder des Ablaufs ihres Mandates und die der Wahrung der Vollmachten der Kammern, wenn letztere keine Sitzungen abhalten.

(3) Die Ständigen Ausschüsse üben nach Ablauf des Mandates oder im Falle der Auflösung der Cortes ihr Amt bis zur Konstituierung der neuen Cortes Generales aus.

(4) In den Sitzungen der entsprechenden Kammer berichtet der Ständige Ausschuss über die behandelten Angelegenheiten und seine Beschlüsse.

## Artikel 79.

(1) Zur Beschlussfassung müssen die Kammern ordnungsgemäß und unter Teilnahme der Mehrheit der Mitglieder zusammengetreten sein.

(2) Die Mehrheit der anwesenden Mitglieder muss den Beschlüssen zustimmen, damit diese gültig sind, ungeachtet der Sondermehrheiten, die von der Verfassung oder den Organgesetzen vorgesehen sind, und denen, welche die Geschäftsordnung der jeweiligen Kammer für die Personenwahl bestimmt.

(3) Die Stimme der Senatoren und Abgeordneten ist persönlich und nicht übertragbar.

## Artikel 80.

Die Vollversammlungen der Kammern sind öffentlich, es sei denn, dass die jeweilige Kammer mit absoluter Mehrheit und gemäß der Geschäftsordnung einen gegenteiligen Beschluss fasst.

## KAPITEL II

## Die Ausarbeitung der Gesetze

## Artikel 81.

(1) Organgesetze sind solche Gesetze, die sich auf die Entwicklung der Grundrechte und der öffentlichen Freiheiten beziehen, solche, die die Autonomiestatuten und das allgemeine Wahlsystem billigen, sowie die übrigen Gesetze, die in der Verfassung vorgesehen sind.

(2) Die Billigung, Änderung oder Aufhebung der Organgesetze erfordert die absolute Mehrheit des Kongresses bei einer endgültigen Abstimmung über den Gesamtentwurf.

## Artikel 82.

(1) Die Cortes Generales können der Regierung die Befugnis erteilen, Normen mit Gesetzesrang über bestimmte in Artikel 81 nicht enthaltene Materien zu erlassen.

(2) Die Gesetzgebungsermächtigung muss mittels eines Rahmengesetzes erfolgen, wenn es sich um die Abfassung von Texten in Artikeln handelt, oder mittels eines ordentlichen Gesetzes, wenn es um die Zusammenlegung verschiedener Rechtstexte zu einem einzigen geht.

(3) Die Gesetzgebungsermächtigung muss der Regierung ausdrücklich für konkrete Sachgebiete und unter Angabe der für die Ausführung festgesetzten Frist übertragen werden. Die Ermächtigung erlischt, sobald die Regierung die entsprechende Norm veröffentlicht hat. Sie darf nicht als stillschweigend oder als auf unbegrenzte Zeit erteilt verstanden werden. Sie erlaubt ebenso wenig eine Weiterübertragung an behördliche Instanzen, die nicht mit der Regierung identisch sind.

(4) Die Rahmengesetze grenzen das Ziel und die Reichweite der Gesetzgebungsermächtigung sowie die Grundsätze und Kriterien, denen bei ihrem Gebrauch zu folgen ist, genau ab.

(5) Die Genehmigung für die Zusammenlegung von Rechtstexten bestimmt den normativen Bereich, auf den sich der Inhalt der Ermächtigung bezieht, und legt im Besonderen fest, ob sie sich auf die bloße Formulierung eines einzigen Textes erstreckt oder ob sie auch die Regelung, Klärung und Harmonisierung der Rechtstexte einschließt, die zusammenzulegen sind.

(6) Unbeschadet der Zuständigkeit der Gerichte können die Ermächtigungsgesetze in jedem Fall zusätzliche Kontrollmöglichkeiten festlegen.

## Artikel 83.

Die Rahmengesetze dürfen in keinem Fall:

- a) eine Abänderung des Rahmengesetzes selbst billigen,
- b) die Befugnis für den Erlass von rückwirkenden Normen erteilen.

## Artikel 84.

Wenn eine Gesetzesvorlage oder ein Abänderungsantrag im Gegensatz zu einer in Kraft befindlichen Gesetzgebungsermächtigung steht, ist die Regierung befugt, sich der Behandlung derselben zu widersetzen. In diesem Fall kann eine Gesetzesvorlage über die völlige oder teilweise Aufhebung des Ermächtigungsgesetzes eingereicht werden.

## Artikel 85.

Die Verfügungen der Regierung, die eine delegierte Gesetzgebung beinhalten, werden als gesetzgebende Verordnungen (*Decretos legislativos*) bezeichnet.



## Artikel 86.

(1) Im Falle einer außerordentlichen und dringenden Notwendigkeit kann die Regierung provisorische gesetzgebende Verfügungen in Form von Gesetzesverordnungen (Decretos leyes) erlassen, die sich jedoch nicht auf die Ordnung der grundlegenden Institutionen des Staates, auf die in Titel 1 geregelten Rechte, Pflichten und Freiheiten der Bürger, auf die Ordnung der Autonomen Gemeinschaften oder auf das allgemeine Wahlrecht beziehen dürfen.

(2) Die Gesetzesverordnungen müssen unverzüglich dem Kongress vorgelegt werden, der hierzu einberufen wird, sofern er sich nicht in einer Sitzungsperiode befindet, und müssen innerhalb von 30 Tagen nach ihrer Verkündung einer Debatte und Gesamtabstimmung unterworfen werden. Der Kongress muss sich innerhalb dieser Frist ausdrücklich über die Bestätigung oder Aufhebung äußern. Zu diesem Zweck sieht die Geschäftsordnung ein summarisches Sonderverfahren vor.

(3) Innerhalb der in Absatz 2 festgesetzten Frist können die Cortes die Gesetzesverordnungen im Eilverfahren wie Gesetzesentwürfe behandeln.

## Artikel 87.

(1) Die Gesetzesinitiative steht gemäß der Verfassung und den Geschäftsordnungen beider Kammern der Regierung, dem Kongress und dem Senat zu.

(2) Die Versammlungen der Autonomen Gemeinschaften können die Regierung um die Annahme eines Gesetzesentwurfes ersuchen oder dem Präsidium des Kongresses eine Gesetzesvorlage einreichen und maximal drei Mitglieder der Versammlung mit der Verteidigung derselben vor dieser Kammer beauftragen.

(3) Ein Organgesetz regelt die Formen der Durchführung und die Voraussetzungen der Volksinitiative zur Einreichung von Gesetzesvorlagen. In jedem Fall ist eine Mindestzahl von 500.000 beglaubigten Unterschriften erforderlich. In den durch Organgesetz zu regelnden Materien, in Steuersachen und internationalen Fragen sowie bezüglich des Begnädigungsrechts ist eine Volksinitiative nicht zulässig.

## Artikel 88.

Die Gesetzesentwürfe werden vom Ministerrat gebilligt, der sie zusammen mit einer Begründung und der Darstellung aller Gegebenheiten, die für eine Äußerung hierzu erforderlich sind, dem Kongress vorlegt.

## Artikel 89.

(1) Die Geschäftsordnungen der Kammern regeln die Behandlung der Gesetzesvorlagen, ohne dass die den Gesetzesentwürfen zustehende Priorität die Ausübung der in Artikel 87 geregelten Gesetzesinitiative verhindert.

(2) Die Gesetzesvorlagen, die der Senat gemäß Artikel 87 berücksichtigt, werden dem Kongress zur Behandlung als solche zugestellt.

## Artikel 90.

(1) Nach der Annahme des Entwurfs eines ordentlichen Gesetzes oder eines Organgesetzes durch den Kongress setzt der Präsident desselben unverzüglich den Senatspräsidenten darüber in Kenntnis, welcher den Text dem Senat zur Beratung vorlegt.

(2) Im Zeitraum von zwei Monaten nach Erhalt des Textes kann der Senat mittels einer begründeten Erklärung sein Veto einlegen oder Änderungsanträge einbringen. Der Entwurf

kann dem König nicht zur Billigung vorgelegt werden, ohne dass der Kongress im Falle eines Vetos den ursprünglichen Text mit absoluter Mehrheit oder nach Ablauf von zwei Monaten nach der Einlegung desselben mit einfacher Mehrheit ratifiziert oder sich über die mit einfacher Mehrheit beschlossene Annahme oder Ablehnung der Änderungen geäußert hat. (3) Bei den von der Regierung oder dem Kongress als dringlich erklärten Entwürfen wird die Frist von zwei Monaten, über die der Senat zur Einlegung eines Vetos oder eines Änderungsantrags verfügt, auf zwanzig Tage verkürzt.

#### Artikel 91.

Der König billigt in einem Zeitraum von fünfzehn Tagen die von den Cortes Generales verabschiedeten Gesetze, verkündet sie und ordnet ihre unverzügliche Veröffentlichung an.

#### Artikel 92.

- (1) Politische Entscheidungen von besonderer Tragweite können einer beratenden Volksabstimmung unterworfen werden.
- (2) Die Volksabstimmung wird nach vorheriger Genehmigung seitens des Kongresses auf Vorschlag des Regierungspräsidenten vom König einberufen.
- (3) Ein Organengesetz regelt die Voraussetzungen und die Verfahrensweise der verschiedenen Arten von Volksabstimmung, die in dieser Verfassung vorgesehen sind.

### KAPITEL III

#### Die internationalen Verträge

#### Artikel 93.

Durch Organengesetz kann der Abschluss von Verträgen genehmigt werden, durch die einer internationalen Organisation oder Institution die Ausübung von aus der Verfassung abgeleiteten Kompetenzen zugestanden wird. Die Gewährleistung der Erfüllung dieser Verträge und der von den internationalen oder supranationalen Organen, die Träger der abgetretenen Kompetenzen sind, ausgehenden Resolutionen obliegt je nach Fall den Cortes Generales oder der Regierung.

#### Artikel 94.

- (1) Die Gewährung oder Zustimmung des Staates zur Bindung durch Verträge oder Abkommen bedarf in folgenden Fällen der vorherigen Genehmigung seitens der Cortes Generales:
  - a) Verträge politischen Inhalts;
  - b) Verträge oder Abkommen militärischen Charakters;
  - c) Verträge oder Abkommen, welche die territoriale Integrität des Staates oder die in Titel I festgelegten Grundrechte und -pflichten berühren;
  - d) Verträge oder Abkommen, die Verpflichtungen für die öffentlichen Finanzen einschließen;
  - e) Verträge oder Abkommen, welche die Änderung oder Aufhebung eines Gesetzes voraussetzen, oder solche, für deren Durchführung legislative Maßnahmen erforderlich sind.
- (2) Der Kongress und der Senat werden unverzüglich über den Abschluss der übrigen Verträge oder Abkommen informiert.

**Artikel 95.**

- (1) Der Abschluss eines internationalen Vertrages, der verfassungswidrige Bestimmungen enthält, bedarf der vorherigen Revision der Verfassung.
- (2) Die Regierung oder beide Kammern können das Verfassungsgericht auffordern, eine Erklärung darüber abzugeben, ob dieser Widerspruch besteht oder nicht.

**Artikel 96.**

- (1) Gültig abgeschlossene internationale Verträge werden nach ihrer offiziellen Veröffentlichung in Spanien Teil der innerstaatlichen Rechtsordnung. Ihre Verfügungen können nur in der von den Verträgen selbst vorgesehenen Form oder gemäß den allgemeinen Regeln des Völkerrechts aufgehoben, suspendiert oder abgeändert werden.
- (2) Für die Kündigung der internationalen Verträge und Abkommen gilt das gleiche Verfahren, das in Artikel 95 für deren Billigung vorgesehen ist.

**TITEL IV**

## Regierung und Verwaltung

**Artikel 97.**

Die Regierung leitet die Innen- und Außenpolitik, die Zivil- und Militärverwaltung und die Verteidigung des Staates. Ihr obliegt die exekutive Funktion und die Verordnungsgewalt gemäß der Verfassung und den Gesetzen.

**Artikel 98.**

- (1) Die Regierung setzt sich aus dem Präsidenten, gegebenenfalls den Vizepräsidenten, den Ministern und den weiteren vom Gesetz bestimmten Mitgliedern zusammen.
- (2) Der Präsident leitet die Regierungsgeschäfte und koordiniert die Funktionen der übrigen Regierungsmitglieder ungeachtet der direkten Zuständigkeit und Verantwortung dieser für ihre Tätigkeit.
- (3) Die Regierungsmitglieder können nur die repräsentativen Aufgaben ausführen, die sich aus dem parlamentarischen Mandat ergeben. Sie dürfen keine andere nicht aus ihrem Amt abgeleitete öffentliche Funktion noch irgendeine berufliche oder kaufmännische Tätigkeit ausüben.
- (4) Das Gesetz regelt das Statut und die Unvereinbarkeiten der Regierungsmitglieder.

**Artikel 99.**

- (1) Nach jeder Neuwahl des Kongresses der Abgeordneten und in allen übrigen verfassungsmäßig begründeten Fällen schlägt der König nach Rücksprache mit den Repräsentanten, die von den im Parlament vertretenen politischen Fraktionen ernannt sind, über den Präsidenten des Kongresses einen Kandidaten für das Amt des Regierungspräsidenten vor.
- (2) Der gemäß Absatz 1 vorgeschlagene Kandidat trägt dem Kongress der Abgeordneten das politische Programm der von ihm vorgesehenen Regierung vor und ersucht die Kammer um ihr Vertrauen.
- (3) Wenn der Kongress der Abgeordneten diesem Kandidaten mit der absoluten Mehrheit der Mitglieder das Vertrauen ausspricht, ernennt der König ihn zum Regierungspräsidenten. Falls diese Mehrheit nicht zustandekommt, wird der gleiche Vorschlag achtundvierzig

Stunden nach der vorherigen Abstimmung einer neuen unterzogen, und das Vertrauen gilt als ausgesprochen, wenn die einfache Mehrheit dafür stimmt.

(4) Wenn nach Durchführung der erwähnten Abstimmungen das Vertrauen für die Investitur nicht ausgesprochen ist, so werden weitere Vorschläge in der in den vorhergehenden Absätzen vorgesehenen Form behandelt.

(5) Falls im Zeitraum von zwei Monaten nach der ersten Investiturabstimmung kein Kandidat das Vertrauen des Kongresses erhalten hat, löst der König beide Kammern auf und beruft mit der Gegenzeichnung des Präsidenten des Kongresses Neuwahlen ein.

#### Artikel 100.

Die weiteren Regierungsmitglieder werden auf Vorschlag ihres Präsidenten vom König ernannt und entlassen.

#### Artikel 101.

(1) Die Regierung tritt nach Abhaltung allgemeiner Wahlen, in den in der Verfassung vorgesehenen Fällen des Vertrauensverlustes seitens des Parlaments oder bei Demission oder Ableben ihres Präsidenten zurück.

(2) Die scheidende Regierung verbleibt bis zum Amtsantritt der neuen Regierung im Amt.

#### Artikel 102.

(1) Die strafrechtliche Haftung des Präsidenten und der übrigen Regierungsmitglieder kann, gegebenenfalls, vor der Strafkammer des Obersten Gerichtshofes gefordert werden.

(2) Wenn es bei der Anklage um Verrat oder irgendein Vergehen gegen die Sicherheit des Staates bei der Amtsausübung geht, kann sie nur auf Initiative eines Viertels der Kongressmitglieder und mit Zustimmung der absoluten Mehrheit des Kongresses vorgebracht werden.

(3) Das königliche Privileg der Begnadigung ist auf keine der Voraussetzungen dieses Artikels anwendbar.

#### Artikel 103.

(1) Die öffentliche Verwaltung dient in objektiver Weise dem Interesse der Allgemeinheit und handelt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der Wirksamkeit, Hierarchie, Dezentralisierung, Entkonzentrierung und Koordination, wobei sie voll dem Gesetz und dem Recht unterliegt.

(2) Die Organe der Staatsverwaltung werden gemäß dem Gesetz gegründet, geleitet und koordiniert.

(3) Das Gesetz regelt das Statut der öffentlichen Beamten, den Zugang zu öffentlichen Ämtern gemäß den Prinzipien der Verdienste und der Befähigung, die Besonderheiten der Ausübung ihres Rechtes, sich einer Gewerkschaft anzuschließen, das System der Unvereinbarkeiten und die Gewährleistung der Unparteilichkeit bei der Ausübung ihrer Ämter.

#### Artikel 104.

(1) Die Sicherheitskräfte und -einheiten, die der Regierung unterstehen, haben die Aufgabe, die freie Ausübung der Rechte und Freiheiten zu schützen und die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten.

(2) Ein Organengesetz legt die Funktionen, die Grundprinzipien des Einsatzes und die Statuten der Sicherheitskräfte und -einheiten fest.

**Artikel 105.**

Das Gesetz regelt:

- a) die Anhörung der Bürger – direkt oder mittels der vom Gesetz anerkannten Organisationen und Verbände – bei der Ausarbeitung sie betreffender Verwaltungsbestimmungen;
- b) den Zugang der Bürger zu den Verwaltungsarchiven und -registern, außer in denjenigen Fällen, die die Sicherheit und Verteidigung des Staates, die Ermittlung strafbarer Handlungen und die Intimsphäre der Personen betreffen;
- c) das Verfahren nach dem Verwaltungsakte vor sich gehen müssen; falls begründet, wird die Anhörung der betroffenen Person gewährleistet.

**Artikel 106.**

(1) Die Gerichte kontrollieren die Verordnungsgewalt und Gesetzmäßigkeit der Verwaltungshandlungen sowie die Unterwerfung der letzteren unter die Zwecke, die sie rechtfertigen.

(2) Privatpersonen haben gemäß den Gesetzesbestimmungen, außer in Fällen höherer Gewalt, das Recht auf Entschädigung eines jeden Schadens, der ihren Gütern und Rechten zugefügt wird, vorausgesetzt, dass der Schaden Folge der Tätigkeit der öffentlichen Dienste ist.

**Artikel 107.**

Der Staatsrat ist das höchste Beratungsorgan der Regierung. Ein Organgesetz regelt seine Zusammensetzung und Zuständigkeiten.

**TITEL V**

Die Beziehungen zwischen der Regierung und den Cortes Generales

**Artikel 108.**

Die Regierung ist für ihre Politik dem Kongress der Abgeordneten gegenüber solidarisch verantwortlich.

**Artikel 109.**

Die Kammern und ihre Ausschüsse können über ihre jeweiligen Präsidenten alle erforderliche Information und Hilfe von der Regierung und ihren Ressorts sowie von allen Behörden des Staates und der Autonomen Gemeinschaften einholen.

**Artikel 110.**

(1) Die Kammern und ihre Ausschüsse können die Anwesenheit der Mitglieder der Regierung fordern.

(2) Die Mitglieder der Regierung haben Zugang zu den Sitzungen der Kammern und ihrer Ausschüsse und die Befugnis, das Wort zu ergreifen; sie können verlangen, dass Beamte ihrer Ressorts in diesen Sitzungen informieren.

**Artikel 111.**

(1) Die Regierung und jedes ihrer Mitglieder haben sich allen von den Kammern an sie gestellten Interpellationen und Fragen zu unterwerfen. Für diese Art Debatten setzen die Geschäftsordnungen eine Mindestzeit pro Woche fest.

(2) Jede Interpellation kann zu einem Antrag führen, in dem die Kammer ihren Standpunkt zum Ausdruck bringt.

#### Artikel 112.

Der Regierungspräsident kann nach vorheriger Erörterung im Ministerrat vor dem Kongress der Abgeordneten die Vertrauensfrage bezüglich seines Regierungsprogramms oder einer allgemeinpolitischen Erklärung stellen. Das Vertrauen gilt als ausgesprochen, wenn die einfache Mehrheit der Abgeordneten dafür stimmt.

#### Artikel 113.

(1) Der Kongress der Abgeordneten kann durch einen mit absoluter Mehrheit angenommenen Misstrauensantrag die Regierung politisch zur Verantwortung ziehen.

(2) Der Misstrauensantrag muss von mindestens einem Zehntel der Abgeordneten vorgeschlagen werden und einen Kandidaten für das Amt der Regierungspräsidentenschaft enthalten.

(3) Über den Misstrauensantrag kann nicht vor Ablauf von fünf Tagen nach seiner Vorlage abgestimmt werden. An den ersten zwei Tagen dieser Frist können Alternativanträge gestellt werden.

(4) Im Falle der Ablehnung des Misstrauensantrags durch den Kongress können die Unterzeichnenden in der gleichen Sitzungsperiode keinen weiteren vorlegen.

#### Artikel 114.

(1) Wenn der Kongress der Regierung das Vertrauen entzieht, reicht diese dem König ihren Rücktritt ein; anschließend wird gemäß den Bestimmungen von Artikel 99 der Regierungspräsident ernannt.

(2) Wenn der Kongress einen Misstrauensantrag annimmt, reicht die Regierung dem König ihren Rücktritt ein, und der in ersterem vorgeschlagene Kandidat besitzt von diesem Zeitpunkt an das Vertrauen der Kammer in allen in Artikel 99 festgelegten Punkten. Der König ernennt ihn anschließend zum Regierungspräsidenten.

#### Artikel 115.

(1) Der Regierungspräsident kann nach vorheriger Erörterung im Ministerrat und unter seiner alleinigen Verantwortung die Auflösung des Kongresses, des Senats oder der Cortes Generales vorschlagen, die vom König verfügt wird. Das Auflösungsdekret setzt das Datum der Wahlen fest.

(2) Der Vorschlag der Auflösung kann nicht vorgelegt werden, solange ein Misstrauensantrag läuft.

(3) Eine erneute Auflösung kann, mit Ausnahme der Bestimmungen von Artikel 99 Abs. 5, erst ein Jahr nach der vorherigen erfolgen.

#### Artikel 116.

(1) Ein Organgesetz regelt den Alarm-, den Ausnahme- und den Belagerungszustand und die entsprechenden Zuständigkeiten und Begrenzungen.

(2) Der Alarmzustand wird von der Regierung mittels eines vom Ministerrat beschlossenen Dekrets für einen Höchstzeitraum von fünfzehn Tagen erklärt. Der Kongress, der darüber unterrichtet werden muss, wird unverzüglich zu diesem Zweck einberufen; ohne dessen

Billigung kann diese Frist nicht verlängert werden. Im Dekret wird der territoriale Bereich bestimmt, auf den sich die Erklärung erstreckt.

(3) Der Ausnahmezustand wird von der Regierung mittels eines vom Ministerrat nach vorheriger Billigung des Kongresses der Abgeordneten beschlossenen Dekrets erklärt. Die Billigung und Ausrufung des Ausnahmezustandes müssen ausdrücklich die Auswirkungen, den territorialen Bereich, auf den er sich erstreckt, und seine Dauer bestimmen; letztere darf dreißig Tage nicht überschreiten, die jedoch um die gleiche Frist und unter den gleichen Bedingungen verlängert werden können.

(4) Der Belagerungszustand wird auf ausschließlichen Vorschlag der Regierung von der absoluten Mehrheit des Kongresses der Abgeordneten erklärt. Der Kongress bestimmt den territorialen Bereich, die Dauer und die Bedingungen desselben.

(5) Die Auflösung des Kongresses der Abgeordneten kann nicht erfolgen, solange irgendeiner der in diesem Artikel enthaltenen Zustände erklärt ist; die Kammern gelten als automatisch einberufen, wenn sie sich nicht in einer Sitzungsperiode befinden. Ihre Tätigkeit sowie die der übrigen konstitutionellen Staatsgewalten dürfen während der Dauer dieser Zustände nicht unterbrochen werden. Falls es nach Auflösung des Kongresses oder Ablauf seines Mandates zu einer Situation kommt, die zu einem dieser Zustände führt, werden die Zuständigkeiten des Kongresses von seinem Ständigen Ausschuss übernommen.

(6) Die Erklärung des Alarm-, des Ausnahme- und des Belagerungszustandes ändert das in der Verfassung und den Gesetzen anerkannte Prinzip der Verantwortlichkeit der Regierung und ihrer Träger nicht.

## TITEL VI

### Die rechtsprechende Gewalt

#### Artikel 117.

(1) Die Justiz geht vom Volke aus und wird von den Richtern, die Bestandteil der rechtsprechenden Gewalt, unabhängig, unabsetzbar verantwortlich und nur dem Gesetz unterworfen sind, im Namen des Königs ausgeübt.

(2) Die Richter können nur aus Gründen und mit den Garantien, die das Gesetz bestimmt, vor Ablauf ihrer Amtszeit entlassen, ihres Amtes enthoben, versetzt oder in den Ruhestand gesetzt werden.

(3) Die Ausübung der Jurisdiktionsgewalt durch Urteilssprechung und -vollstreckung in allen Arten von Prozessen obliegt ausschließlich den in den Gesetzen vorgesehenen Gerichten, und zwar gemäß den Normen über die Zuständigkeiten und Verfahrensweisen, die diese Gesetze festlegen.

(4) Die Gerichte üben nur die in Absatz 3 festgelegten Funktionen sowie diejenigen aus, welche ihnen ausdrücklich zur Gewährleistung irgendeines Rechtes vom Gesetz zugeschrieben werden.

(5) Das Prinzip der Einheit der Gerichtsbarkeit ist die Grundlage der Organisation und Tätigkeit der Gerichte. Das Gesetz regelt die Ausübung der Militärgerichtsbarkeit im strikt militärischen Bereich und unter den Voraussetzungen des Belagerungszustandes gemäß den Verfassungsprinzipien.

(6) Ausnahmegerichte sind unzulässig.

**Artikel 118.**

Den Urteilssprüchen und allen anderen rechtskräftigen Beschlüssen der Richter und Gerichte ist Folge zu leisten; ebenso muss die von diesen im Verlauf eines Prozesses und bei der Vollstreckung des Urteils verlangte Zusammenarbeit geleistet werden.

**Artikel 119.**

Die Justiz ist kostenfrei, wenn das Gesetz dies verfügt, und grundsätzlich im Falle von Personen, die ihren Mangel an Mitteln zur Prozessführung nachweisen.

**Artikel 120.**

- (1) Gerichtsverhandlungen sind öffentlich, mit Ausnahme derer, die in den Prozessgesetzen vorgesehen sind.
- (2) Das Gerichtsverfahren wird vorwiegend mündlich geführt, vor allem in Strafsachen.
- (3) Die Urteile müssen immer begründet sein und werden in öffentlicher Verhandlung bekannt gegeben.

**Artikel 121.**

Der auf Grund eines Justizirrtums oder als Folge anormaler Ausübung der Justizverwaltung entstandene Schaden berechtigt gemäß dem Gesetz zu einer Entschädigung zu Lasten des Staates.

**Artikel 122.**

- (1) Das Organgesetz über die rechtsprechende Gewalt regelt die Zusammensetzung, Tätigkeit und Leitung der Gerichte sowie das Rechtsstatut der Berufsrichter, die eine einzige Körperschaft bilden, und die des Personals im Dienste der Justizverwaltung.
- (2) Der Generalrat der rechtsprechenden Gewalt ist das leitende Organ derselben. Das Organgesetz wird sein Statut und die Unvereinbarkeiten seiner Mitglieder und ihrer Funktionen, insbesondere in Fragen der Ernennungen, Beförderungen, Kontrolle und Disziplinarverfahren regeln.
- (3) Der Generalrat der rechtsprechenden Gewalt setzt sich zusammen aus dem Präsidenten des Obersten Gerichtshofes, der ihm vorsteht, und zwanzig vom König für einen Zeitraum von fünf Jahren ernannten Mitgliedern: zwölf Richter aller Justizkategorien gemäß den Bestimmungen des Organgesetzes, vier auf Vorschlag des Kongresses und vier auf Vorschlag des Senats; in beiden Fällen werden sie mit der Mehrheit von drei Fünfteln der Mitglieder beider Kammern unter Anwälten und anderen Juristen mit anerkannter Kompetenz und über fünfzehnjähriger Berufserfahrung ausgewählt.

**Artikel 123.**

- (1) Der Oberste Gerichtshof, dessen Gerichtsbarkeit sich auf ganz Spanien erstreckt, ist das in jeder Hinsicht oberste rechtsprechende Organ, mit Ausnahme in Sachen der Verfassungsgarantien.
- (2) Der Präsident des Obersten Gerichtshofes wird auf Vorschlag des Generalrates der rechtsprechenden Gewalt vom König in der vom Gesetz vorgesehenen Form ernannt.

**Artikel 124.**

- (1) Die Staatsanwaltschaft hat unbeschadet der anderen Organen übertragenen Funktionen die Aufgabe, die Tätigkeit der Justiz zugunsten der Legalität, der Bürgerrechte und des vom



Gesetz gewährten öffentlichen Interesses von Amts wegen oder auf Antrag der betroffenen Personen zu fördern sowie über die Unabhängigkeit der Gerichte zu wachen und sich vor diesen für das soziale Interesse einzusetzen.

(2) Die Staatsanwaltschaft übt ihre Funktionen durch eigene Organe gemäß den Prinzipien der Handlungseinheit und der hierarchischen Abhängigkeit und in jedem Fall unter Achtung der Grundsätze der Legalität und Unparteilichkeit aus.

(3) Das Organstatut der Staatsanwaltschaft wird durch Gesetz geregelt.

(4) Der Generalstaatsanwalt wird vom König auf Vorschlag der Regierung und nach Anhörung des Generalrates der rechtsprechenden Gewalt ernannt.

Artikel 125.

Die Bürger können die Popularklage einbringen und durch die Einrichtung der Geschworenen in der Form und in jenen Strafprozessen, die das Gesetz bestimmt, sowie an gewohnheitsrechtlichen und traditionellen Gerichten an der Justizausübung teilnehmen.

Artikel 126.

Die Kriminalpolizei unterliegt in ihren Funktionen der Feststellung strafbarer Handlungen und des Auffindens und der Festnahme des Täters gemäß den Bestimmungen des Gesetzes den Richtern, den Gerichten und der Staatsanwaltschaft.

Artikel 127.

(1) Die Richter und Staatsanwälte können während ihrer Amtszeit keine anderen öffentlichen Ämter bekleiden noch politischen Parteien oder Gewerkschaften angehören. Das System und die Formen des beruflichen Zusammenschlusses der Richter und Staatsanwälte werden durch Gesetz festgelegt.

(2) Das Gesetz bestimmt das System der Unvereinbarkeiten der Mitglieder der rechtsprechenden Gewalt, welches ihre völlige Unabhängigkeit gewährleisten muss.

## **TITEL VII**

### **Wirtschaft und Finanzen**

Artikel 128.

(1) Der gesamte Reichtum des Landes in seinen verschiedenen Formen und unbeschadet seiner Trägerschaft ist dem allgemeinen Interesse untergeordnet.

(2) Die öffentliche Initiative im Wirtschaftsleben wird anerkannt. Durch Gesetz können der öffentlichen Hand wesentliche Mittel oder Dienste gesichert werden, besonders im Falle eines Monopols; ebenso kann das Eingreifen in Unternehmen beschlossen werden, wenn das allgemeine Interesse dies erforderlich machen sollte.

Artikel 129.

(1) Das Gesetz legt die Formen der Beteiligung der Interessierten an der Sozialen Sicherheit und an der Tätigkeit derjenigen öffentlichen Organen fest, deren Funktion sich direkt auf die Lebensqualität oder das Allgemeinwohl richtet.

(2) Die öffentlichen Gewalten fördern die verschiedenen Formen der Beteiligung innerhalb der Unternehmen sowie die Genossenschaften mittels der entsprechenden Gesetzgebung.

Sie sehen ebenfalls die Mittel vor, die den Arbeitnehmern den Zugang zum Besitz der Produktionsmittel ermöglichen.

#### Artikel 130.

- (1) Die öffentlichen Gewalten sorgen für die Modernisierung und Entwicklung aller Wirtschaftsbereiche, insbesondere der Landwirtschaft, Viehzucht, Fischerei und des Handwerks wegens, um den Lebensstandard aller Spanier einander anzugleichen.
- (2) Dem gleichen Zweck dient eine Sonderbehandlung der Gebirgszonen.

#### Artikel 131.

- (1) Der Staat kann mittels Gesetz die allgemeine Wirtschaftstätigkeit planen, um die kollektiven Bedürfnisse zu decken, die Entwicklung der Regionen und Sektoren auszugleichen und zu harmonisieren und das Wachstum des Einkommens und des Reichtums sowie deren gerechtere Verteilung zu fördern.
- (2) Die Regierung arbeitet gemäß den ihr von den Autonomen Gemeinschaften vorgelegten und aus der Beratung und Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und anderen Berufs-, Unternehmer- und Wirtschaftsverbänden hervorgegangenen Vorschlägen die Planungsprojekte aus. Zu diesem Zweck wird ein Rat gegründet, dessen Zusammensetzung und Funktionen durch Gesetz geregelt werden.

#### Artikel 132.

- (1) Das Gesetz regelt die Rechtslage des Staats- und des Gemeindebesitzes, und zwar unter Achtung der Prinzipien der Unveräußerlichkeit, Unverjährbarkeit und Unpfändbarkeit, sowie seine Entwidmung.
- (2) Zum Staatsbesitz gehört, was das Gesetz bestimmt; in jedem Fall die Küstenzone, Strände, Hoheitsgewässer und die natürlichen Hilfsmittel des Wirtschaftsgebietes und des Festlandssockels.
- (3) Das Gesetz regelt das Staats- und das Nationalvermögen, ihre Verwaltung, ihren Schutz und ihre Erhaltung.

#### Artikel 133.

- (1) Die ursprüngliche Befugnis für die Erhebung von Steuern obliegt ausschließlich durch Gesetz dem Staat.
- (2) Die Autonomen Gemeinschaften und die Gebietskörperschaften können in Übereinstimmung mit der Verfassung und den Gesetzen Steuern erheben und ihre Entrichtung verlangen.
- (3) Jeder Steuergewinn, welcher die Staatsabgaben betrifft, muss kraft Gesetzes festgelegt werden.
- (4) Die öffentlichen Verwaltungen können nur den Gesetzen gemäß finanzielle Verpflichtungen eingehen und Ausgaben machen.

#### Artikel 134.

- (1) Der Regierung obliegt die Ausarbeitung des Staatshaushalts und den Cortes Generales seine Prüfung, Abänderung und Verabschiedung.
- (2) Der Staatshaushaltsplan wird für ein Jahr aufgestellt; er erstreckt sich auf die Gesamtheit der Ausgaben und Einnahmen der öffentlichen Hand und bestimmt den Betrag der Steuergewinne, welche die Staatsabgaben betreffen.

- (3) Die Regierung muss dem Kongress der Abgeordneten mindestens drei Monate vor Ablauf des vorjährigen den neuen Staatshaushalt vorlegen.
- (4) Wenn das Haushaltsgesetz nicht vor dem ersten Tag des entsprechenden Rechnungsjahres gebilligt ist, so gilt der Staatshaushalt des Vorjahres bis zum Inkrafttreten des neuen als automatisch verlängert.
- (5) Nach Inkrafttreten des Staatshaushaltes kann die Regierung Gesetzentwürfe vorlegen, die eine Erhöhung der öffentlichen Ausgaben oder eine Verringerung der Einnahmen im entsprechenden Rechnungsjahr vorsehen.
- (6) Jede Behandlung von Anträgen oder Änderungen, die eine Krediterhöhung oder Einnahmeverringering voraussetzen, bedarf der Zustimmung der Regierung.
- (7) Das Haushaltsgesetz kann keine Steuern errichten. Es kann sie modifizieren, wenn ein materielles Steuergesetz dies vorsieht.

#### Artikel 135.

- (1) Alle öffentlichen Verwaltungen unterwerfen ihr Gebaren dem Grundsatz der Haushaltsstabilität.
- (2) Der Staat und die Autonomen Gemeinschaften dürfen kein strukturelles Defizit aufweisen, das die gegebenenfalls von der Europäischen Union für deren Mitgliedstaaten festgelegten Grenzen übersteigt.  
Ein Organgesetz legt das dem Staat und den Autonomen Gemeinschaften im Verhältnis zu ihrem Bruttoinlandsprodukt maximal erlaubte strukturelle Defizit fest. Die lokalen Körperschaften müssen einen ausgeglichenen Haushalt aufweisen.
- (3) Der Staat und die Autonomen Gemeinschaften müssen gesetzlich dazu befugt werden, öffentliche Schuldtitel auszugeben oder Kredite aufzunehmen.  
Kredite zur Zinsbegleichung und Kapitaltilgung der öffentlichen Schulden der Verwaltungen fließen stets in die Ausgabenrechnung des betreffenden Haushalts ein und ihre Begleichung besitzt absoluten Vorrang. Kredite dieser Art dürfen keinen Änderungen unterliegen, solange sie den Bedingungen laut dem Gesetz über die Ausgabe öffentlicher Schuldtitel genügen.  
Der Gesamtschuldenstand der öffentlichen Verwaltungen darf im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt des Staates den Referenzwert laut dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union nicht übersteigen.
- (4) Die Grenzen für das strukturelle Defizit und den öffentlichen Schuldenstand dürfen nur dann überschritten werden, wenn eine Naturkatastrophe, eine wirtschaftliche Rezession oder eine außerordentliche Notfallsituation vorliegt, die nach Einschätzung der absoluten Mehrheit des Kongresses der Abgeordneten durch den Staat nicht beherrschbar ist und dessen Finanzlage oder dessen wirtschaftliche oder soziale Nachhaltigkeit erheblich beeinträchtigt.
- (5) Ein Organgesetz regelt die Grundsätze, auf die dieser Artikel Bezug nimmt, sowie die jeweilige Verfahrensbeteiligung der Organe zur institutionellen Koordination zwischen den öffentlichen Verwaltungen in politischer, steuerlicher und finanzieller Hinsicht. In jedem Fall regelt es die folgenden Belange:
  - a) Die Verteilung der Defizit- und Verschuldungsgrenzen zwischen den öffentlichen Verwaltungen, die außergewöhnlichen Umstände für deren Überschreitung sowie die Form und Frist für die Berichtigung etwaiger Abweichungen.
  - b) Die Methodik und das Verfahren für die Berechnung des strukturellen Defizits.

c) Die jeweilige Haftung der öffentlichen Verwaltungen, falls die Haushaltsstabilitätsziele verfehlt werden.

(6) In Übereinstimmung mit ihren jeweiligen Statuten und innerhalb der Grenzen laut diesem Artikel verabschieden die Autonomen Gemeinschaften die sachdienlichen Bestimmungen für die wirksame Umsetzung des Stabilitätsgrundsatzes in ihren haushaltsbezogenen Vorschriften und Entscheidungen.

Artikel 136.

(1) Der Rechnungshof ist das oberste Organ der Rechnungskontrolle und der Prüfung der Wirtschaftsführung des Staates sowie der öffentlichen Hand.

Er hängt direkt von den Cortes Generales ab und übt seine Prüfungs- und Kontrollfunktionen bezüglich des staatlichen Rechnungswesens in Vertretung derselben aus.

(2) Die Staatsrechnungen und die der öffentlichen Hand werden dem Rechnungshof zur Prüfung vorgelegt. Der Rechnungshof legt den Cortes Generales unbeschadet seiner eigenen Zuständigkeit einen Jahresbericht vor, in dem er gegebenenfalls über seiner Ansicht nach vorgekommene Fälle von Verstößen oder Verantwortlichkeiten informiert.

(3) Die Mitglieder des Rechnungshofes sind ebenso unabhängig und unabsetzbar und den gleichen Unvereinbarkeiten unterworfen wie die Richter.

(4) Ein Organgesetz regelt die Zusammensetzung, Organisation und Funktionen des Rechnungshofes.

## **TITEL VIII**

Die territoriale Gliederung des Staates

### **KAPITEL I**

Allgemeine Grundsätze

Artikel 137.

Das Staatsgebiet wird in Gemeinden, Provinzen und Autonome Gemeinschaften gegliedert. Sie alle genießen Autonomie bezüglich der Verfolgung ihrer entsprechenden Interessen.

Artikel 138.

(1) Der Staat gewährleistet die Verwirklichung des in Artikel 2 der Verfassung festgelegten Prinzips der Solidarität durch den Einsatz für die Herstellung eines angemessenen und gerechten wirtschaftlichen Gleichgewichtes zwischen den verschiedenen Teilen des spanischen Gebietes; er berücksichtigt insbesondere die Gegebenheit des insularen Charakters.

(2) Die Unterschiede zwischen den Statuten der einzelnen Autonomen Gemeinschaften dürfen keinesfalls zu wirtschaftlichen oder sozialen Privilegien führen.

Artikel 139.

(1) Alle Spanier haben im gesamten Staatsgebiet die gleichen Rechte und Pflichten.

(2) Keine Behörde darf Maßnahmen ergreifen, die direkt oder indirekt die Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit der Personen sowie den freien Güterverkehr in ganz Spanien behindern.

## KAPITEL II

## Die Lokalverwaltung

## Artikel 140.

Die Verfassung gewährleistet die Autonomie der Gemeinden. Diese verfügen über volle Rechtspersönlichkeit. Ihre Regierung und Verwaltung obliegen den entsprechenden Gemeindevertretungen, die sich aus dem Bürgermeister und den Ratsmitgliedern zusammensetzen. Die Ratsmitglieder werden in allgemeiner, gleicher, freier, direkter und geheimer Wahl in der Form, die das Gesetz vorsieht, von den Bürgern der Gemeinde gewählt. Die Bürgermeister werden von den Ratsmitgliedern oder den Bürgern gewählt. Das Gesetz regelt die Voraussetzungen, unter welchen die Einrichtung der Bürgerversammlung angebracht ist.

## Artikel 141.

(1) Die Provinz ist eine durch den Zusammenschluss von Gemeinden gekennzeichnete lokale Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit und Gebietsunterteilung für die Ausführung der Staatsgeschäfte. Jedwede Veränderung der Grenzen der Provinzen muss mittels Organgesetz von den Cortes Generales gebilligt werden.

(2) Die autonome Regierung und Verwaltung der Provinzen obliegen Provinzialräten (Diputaciones) oder anderen repräsentativen Körperschaften.

(3) Der von den Provinzen unabhängige Zusammenschluss von Gemeinden ist zulässig.

(4) In den Archipelen verfügen die Inseln außerdem über eine eigene Verwaltung in Form der Inselparlamente (Cabildos) oder -räte (Consejos).

## Artikel 142.

Die lokalen Finanzverwaltungen müssen über ausreichende Mittel verfügen, um die den entsprechenden Körperschaften vom Gesetz zugeschriebenen Funktionen erfüllen zu können; diese Mittel stammen im Wesentlichen aus den eigenen Steuereinnahmen sowie aus dem Anteil an denen des Staates und denen der Autonomen Gemeinschaften.

## KAPITEL III

## Die Autonomen Gemeinschaften

## Artikel 143.

(1) Bei der in Artikel 2 der Verfassung anerkannten Ausübung des Rechtes auf Autonomie können die aneinandergrenzenden Provinzen mit gemeinsamen historischen, kulturellen und wirtschaftlichen Gegebenheiten, die Inselgebiete und die Provinzen, welche eine historisch begründete regionale Gemeinsamkeit bilden, die Selbstregierung erlangen und sich nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Titels und der entsprechenden Statuten als Autonome Gemeinschaften konstituieren.

(2) Die Initiative des Autonomieprozesses obliegt allen interessierten Provinzialräten oder dem entsprechenden interinsularen Organ und zwei Dritteln der Gemeinden, deren Bevölkerung mindestens die Mehrheit der Wählerliste jeder Provinz oder Insel darstellt. Diese Voraussetzungen müssen in der Frist von sechs Monaten nach dem ersten diesbezüglichen Beschluss seitens einer der betreffenden lokalen Körperschaften erfüllt werden.

(3) Im Falle des Misserfolges der Initiative kann diese erst nach fünf Jahren wiederholt werden.

**Artikel 144.**

Die Cortes Generales können aus Gründen des nationalen Interesses mittels Organgesetz:

- a) die Konstituierung einer Autonomen Gemeinschaft genehmigen, wenn der entsprechende territoriale Bereich den einer Provinz nicht überschreitet und die Voraussetzungen von Artikel 143 Abs. 1 nicht erfüllt;
- b) ein Autonomiestatut für die Gebiete genehmigen oder gegebenenfalls beschließen, welche in keine Provinz eingegliedert sind;
- c) die Initiative der lokalen Körperschaften, auf die sich Artikel 143 Abs. 2 bezieht, übernehmen.

**Artikel 145.**

(1) Die Föderation Autonomen Gemeinschaften ist keinesfalls zulässig.

(2) Die Statuten können die Voraussetzungen, Bedingungen und Formalitäten regeln, unter denen die Autonomen Gemeinschaften untereinander Verträge über die Ausführung und Gewährung von Leistungen, die ihnen eigen sind, abschließen können, sowie die Art und die Wirkungen der entsprechenden Mitteilung an die Cortes Generales festlegen. Bei allen übrigen Voraussetzungen bedarf es der Genehmigung der Cortes Generales für den Abschluss von Kooperationsverträgen zwischen den Autonomen Gemeinschaften.

**Artikel 146.**

Der Statutenentwurf wird von einer Versammlung ausgearbeitet, die sich aus den Mitgliedern des Provinzialrates oder des interinsularen Organs der betreffenden Provinzen und den in ihnen gewählten Abgeordneten und Senatoren zusammensetzt; der Entwurf wird den Cortes Generales vorgelegt, die ihn wie ein Gesetz behandeln.

**Artikel 147.**

(1) Im Rahmen der Bestimmungen dieser Verfassung sind die Statuten die grundsätzliche institutionelle Norm der jeweiligen Autonomen Gemeinschaft; der Staat erkennt sie an und schützt sie als Bestandteil seiner Rechtsordnung.

(2) Die Autonomiestatuten müssen enthalten:

- a) den Namen der Gemeinschaft, der ihrer historischen Identität am besten entspricht;
- b) die Abgrenzung ihres Gebietes;
- c) den Namen, die Organisation und den Sitz der eigenen autonomen Institutionen;
- d) die im Rahmen der Verfassung übernommenen Zuständigkeiten und die Grundlagen für die Übernahme der ihnen zukommenden Dienste.

(3) Eine Statutenänderung erfolgt gemäß der darin vorgesehenen Verfahrensweise und bedarf in jedem Falle der Zustimmung der Cortes Generales mittels eines Organgesetzes.

**Artikel 148.**

(1) Die Autonomen Gemeinschaften können auf folgenden Gebieten Zuständigkeiten übernehmen:

1. Organisation ihrer Institutionen für die Selbstregierung;
2. Veränderungen der in ihrem Gebiet enthaltenen Gemeindegrenzen und allgemein die Funktionen, die der Staatsverwaltung bezüglich der lokalen Körperschaften obliegen und deren Übertragung von der Gesetzgebung über Kommunalverwaltung genehmigt wird;

3. Gebietsordnung, Städte- und Wohnungsbau;
  4. Öffentliche Bauten, deren Errichtung in ihrem Gebiet von Interesse für die Autonome Gemeinschaft ist;
  5. Eisenbahnen und Straßen, deren Verlauf sich in seiner Gesamtheit auf das Gebiet der Autonomen Gemeinschaft erstreckt, sowie der von diesen Mitteln oder per Kabelverkehr durchgeführte Transport;
  6. Nothäfen, Sport- und Sportflughäfen und im Allgemeinen solche, die keine kommerziellen Tätigkeiten ausüben;
  7. Landwirtschaft und Viehzucht im Rahmen der allgemeinen Wirtschaftsordnung;
  8. Waldländereien und Forstwirtschaft;
  9. Durchführung des Umweltschutzes;
  10. Projekte, Bau und Betrieb der Wassernutzungswerke, Kanäle und Bewässerungsanlagen, die von Interesse für die Autonome Gemeinschaft sind; Mineral- und Thermalquellen;
  11. Binnenfischerei, Schalen- und Krustentierzucht und Aquakultur, Jagdwesen und Flussfischfang;
  12. Lokale Messen und Ausstellungen;
  13. Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Autonomen Gemeinschaft innerhalb der von der staatlichen Wirtschaftspolitik gesetzten Ziele;
  14. Handwerkswesen;
  15. Museen, Bibliotheken und Musikkonservatorien, die von Interesse für die Autonome Gemeinschaft sind;
  16. Pflege der Bau- und Kunstdenkmäler, die von Interesse für die Autonome Gemeinschaft sind;
  17. Förderung der Kultur, der Forschung und gegebenenfalls der Lehre der Sprache der Autonomen Gemeinschaft;
  18. Förderung und Gestaltung des Tourismus innerhalb ihres Territorialbereiches;
  19. Förderung von Sport und Freizeitgestaltung;
  20. Sozialfürsorge;
  21. Gesundheit und Hygiene;
  22. Bewachung und Schutz ihrer Gebäude und Einrichtungen. Koordination und weitere Befugnisse bezüglich der Lokalpolizei nach Maßgabe eines Organgesetzes.
- (2) Die Autonomen Gemeinschaften können nach einem Zeitraum von 5 Jahren und mittels einer Statutenänderung ihre Zuständigkeiten innerhalb des im Artikel 149 vorgesehenen Rahmens allmählich erweitern.

#### Artikel 149.

(1) Der Staat besitzt die ausschließliche Zuständigkeit für:

1. die Regelung der grundlegenden Bedingungen, die die Gleichheit aller Spanier bei der Ausübung ihrer Rechte und der Erfüllung ihrer verfassungsmäßigen Pflichten gewährleisten;
2. die Staatsangehörigkeit, die Ein- und Auswanderung sowie das Fremden- und Asylrecht;
3. die internationalen Beziehungen;
4. Verteidigung und Streitkräfte;
5. Justizverwaltung;
6. Handels-, Strafrechts- und Strafanstaltsgesetzgebung; Prozessrechtsgesetzgebung unbeschadet der notwendigen Besonderheiten, die sich in dieser Hinsicht aus den Eigenheiten des materiellen Rechtes der Autonomen Gemeinschaften ergeben;

7. Arbeitsgesetzgebung unbeschadet ihrer Durchführung seitens der Organe der Autonomen Gemeinschaften;
8. Zivilgesetzgebung unbeschadet der Erhaltung, Modifizierung und Entwicklung der gegebenenfalls vorhandenen Zivil-, Foral- und Sonderrechte durch die Autonomen Gemeinschaften; in jedem Fall die Regeln zur Anwendung und Wirksamkeit der Rechtsnormen, zivilrechtliche Verhältnisse hinsichtlich der Eheformen, Ordnung der öffentlichen Register und Urkunden, Grundlagen der Vertragspflichten, Normen für die Lösung von Gesetzeskonflikten und Festlegung der Rechtsquellen, in letzterem Fall unter Wahrung der Normen des Foral- und Sonderrechtes;
9. Gesetzgebung über Urheberrecht und Patentrecht;
10. Zoll- und Tarifwesen; Außenhandel;
11. Währungssystem: Devisen, Geldwechsel und Konvertibilität; Grundlagen des Kredit-, Bank- und Versicherungswesens;
12. Gesetzgebung über Gewichte und Maße, Festlegung der offiziellen Zeit;
13. Grundlagen und Koordination der allgemeinen Wirtschaftsplanung;
14. allgemeines Finanzwesen und Staatsschuld;
15. Förderung und allgemeine Koordination der wissenschaftlichen und technischen Forschung;
16. äußeres Gesundheitswesen; Grundlagen und allgemeine Koordination des Gesundheitswesens; Gesetzgebung über pharmazeutische Produkte;
17. grundlegende Gesetzgebung und wirtschaftliche Ordnung der Sozialen Sicherheit unbeschadet der Ausführung ihrer Leistungen durch die Autonomen Gemeinschaften;
18. Grundlagen der Rechtsordnung der öffentlichen Verwaltung und der statutsmäßigen Ordnung ihrer Beamten, wobei den der Verwaltung Unterstehenden auf jeden Fall gleiche Behandlung gewährleistet wird; gemeinsames Verwaltungsverfahren unbeschadet der aus der eigenen Organisation der Autonomen Gemeinschaften hervorgehenden Besonderheiten; Gesetzgebung über Zwangseinteignung; grundlegende Gesetzgebung über Verwaltungsverträge und -konzessionen und Haftungssystem aller öffentlichen Verwaltungen;
19. Meeresfischerei unbeschadet der Zuständigkeiten, die bei der Ordnung dieses Bereiches den Autonomen Gemeinschaften zuerkannt werden;
20. Handelsmarine und Schiffsflaggenverleihung, Beleuchtung von Küsten und Seezeichen; Häfen von allgemeinem Interesse; Kontrolle des Luftraumes, Luftverkehrs und Lufttransportes; Wetterdienst und Eintragung von Luftfahrzeugen;
21. Eisenbahnen und Straßentransporte, die durch das Gebiet von mehr als einer Autonomen Gemeinschaft führen; allgemeines Verkehrswesen; Kraftfahrzeugverkehr; Post- und Fernmeldewesen; Luftkabel, Unterseekabel und Funkwesen;
22. Gesetzgebung, Ordnung und Konzession der hydraulischen Quellen und Nutzung in den Fällen, in denen der Wasserlauf durch das Gebiet von mehr als einer Autonomen Gemeinschaft führt, und Genehmigung elektrischer Einrichtungen in den Fällen, in denen die Nutzung sich auf eine andere Gemeinschaft erstreckt oder der Energietransport über den eigenen Territorialbereich hinausgeht;
23. grundlegende Gesetzgebung über den Umweltschutz unbeschadet der Befugnisse der Autonomen Gemeinschaften zum Erlass zusätzlicher Schutzvorschriften; Grundgesetzgebung über Waldländereien und Forstwirtschaft sowie Viehtrifte;
24. öffentliche Bauten, die von allgemeinem Interesse sind oder deren Errichtung sich auf mehr als eine Autonome Gemeinschaft auswirkt;